RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INSTAURADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RADICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSO-QUEJA-002/2025

Vistos para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Ordinario, identificado con el número de expediente citado al rubro, instaurado de oficio por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, por hechos que se consideran contrarios a la normatividad electoral, cuya realización se imputa al **Partido Revolucionario Institucional.**

R E S U L T A N D O:

Correspondiente al año dos mil veintidós

1. Demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales del estado de Jalisco. El diecinueve de octubre, en sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo identificado con la clave alfanumérica INE/CG638/2022[1], por el que aprobó la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Jalisco y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para utilizarse a partir del Proceso Electoral Local Concurrente con el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Correspondientes al año dos mil veintitrés

2. Publicación de la reforma a diversos artículos del Código Electoral del Estado de Jalisco[2], relativos a garantizar el principio de paridad de género. El seis de julio, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el decreto número 29217/LXIII/23,[3] través del cual se modifican y adicionan los artículos 2, 5, 17, 21, 134, 236, 237, 237 Bis, 237 Ter, 237

[1] Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/144401/CGex202210-19-ap-1-3-Gaceta.pdf
[2] En adelante Código Electoral
[3] Consultable en: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/newspaper/import/07-06-23-v.pdf

Quáter del Código Electoral, en materia de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en Jalisco.

3. Publicación de la reforma a diversos artículos del Código Electoral, relativos a la representación de los grupos en situación de vulnerabilidad en la política local. El veinte de julio, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto número 29235/LXIII/23,[4] a través del cual se modificaron y adicionaron diversos artículos en materia de postulación a cargos de elección popular de personas integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, para garantizar la representación. Los grupos abarcados por el decreto son: personas indígenas, personas jóvenes, la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y jaliscienses residentes en el extranjero.

4. Aprobación del Plan Integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2023-2024. El veinte de julio, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo identificado con la clave alfanumérica INE/CG446/2023[5], por el cual se aprobó el Plan Integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2023-2024.

5. Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, en el estado de Jalisco. El ocho de septiembre, en sesión extraordinaria este Consejo General, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-057/2023[6], aprobó los Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024[7] en los que se establecieron, las normas para garantizar la paridad de género, así como las disposiciones a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, que habrán de observar

[4] Disponible para su consulta en el enlace: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-20-23-vii.pdf
[5] Disponible para su consulta en el enlace: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/152565/CGex202307-20-ap-25-Gaceta.pdf
[6] Disponible para su consulta en el enlace: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-09-08/7iepc-acg-057-2023.pdf
7 En lo sucesivo Lineamientos

los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes para el registro de sus candidaturas durante el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024 en el estado de Jalisco.

6. Aprobación del Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024. El dieciocho de septiembre, en la décima cuarta sesión extraordinaria, este Consejo General, emitió el acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-060/2023[8], mediante el cual se aprobó el Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024[9].

7. Aprobación del texto de la convocatoria para la celebración de elecciones. El uno de noviembre, en la décima novena sesión extraordinaria, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-071/2023[10], este Consejo General aprobó el texto de la convocatoria para la celebración de elecciones constitucionales del estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.

Asimismo, el dos de noviembre, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" [11], la convocatoria para la celebración de elecciones constitucionales en el estado de Jalisco, mismas que se llevarían a cabo el domingo dos de junio de dos mil veinticuatro.

8. Determinación del número de regidurías por ambos principios, que habrán de elegirse en cada municipio del estado de Jalisco. En la misma sesión señalada en el punto que antecede, este Consejo General mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-073/2023,[12] aprobó el número de regidurías por ambos principios, que habrán de elegirse en cada municipio del estado de Jalisco.

9. Presentación del convenio de coalición parcial denominada "Fuerza y Corazón por Jalisco". El veinticinco de noviembre, se presentó ante este Instituto Electoral, el convenio de coalición parcial denominada **"Fuerza y Corazón por Jalisco"**, conformada por los partidos

[8] Consultable en: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-09-18/5iepc-acg-060-2023notaaclaratoria.pdf
[9] Dicho Calendario Integral no fue impugnado, por lo que los plazos ahí establecidos se encuentran firmes y vigentes.
[10] Consultable en: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-11-01/1iepc-acg-071-2023.pdf
[11] Consultable en: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/newspaper/getAsset?q=newspaper/21270/newspaper231101111000.pdf
[12] Disponible para su consulta en el enlace: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-11-01/3iepc-acg-073-2023.pdf

políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, para la postulación de candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, así como la integración de los ayuntamientos en el estado de Jalisco.

10. Aprobación del convenio de coalición para participar en la elección a los cargos de diputaciones y munícipes. El cinco de diciembre, en la vigésima primera sesión extraordinaria este Consejo General, mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-099/2023[13], declaró procedente el registro del convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, denominada **"Fuerza y Corazón por Jalisco"** para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.

11. Notificación de los puntos resolutivos de la Acción de Inconstitucionalidad 161/2023 y sus acumulados 166/2023, 167/2023, 169/2023 Y 171/2023. El once de diciembre, se recibió oficio 44569/2023 en la Oficialía de Partes de este Instituto, registrado mediante número de folio 02184, a través del cual se notifica la resolución a la acción de inconstitucionalidad 161/2023 y sus acumulados 166/2023, 167/2023, 169/2023 y 171/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella, se declaró la invalidez del artículo 237 Quáter, numeral 1 del Código Electoral, adicionado mediante el decreto número 29217/LXIII/23, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el seis de que, en síntesis, establecía la forma en que debían contabilizarse el cumplimiento de las reglas de paridad respecto a los partidos políticos que participan en alguna coalición.

12. Aprobación del Lineamiento para el Registro de Candidaturas y Criterios de Reelección en la Postulación de Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024 en el estado de Jalisco. El quince de diciembre, en la vigésima cuarta sesión extraordinaria, este Consejo General mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-105/2023[14], aprobó el Lineamiento para el Registro de Candidaturas y Criterios de Reelección en la Postulación de Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024 en el estado de Jalisco.

---

[13] Consultable desde: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-05/17iepc-acg-099-2023.pdf

[14] Consultable en: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-15/3iepc-acg-105-2023.pdf

13. Aprobación de los anexos estadísticos, así como de los mecanismos de verificación de paridad de género y disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. En la sesión referida en el antecedente previo, este Consejo General, mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-106/2023[15], aprobó los anexos estadísticos de las coaliciones registradas ante este organismo electoral y de los partidos políticos que las integran, así como los mecanismos de verificación de la paridad de género y las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas de las coaliciones parciales durante el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024 en el estado de Jalisco.

Correspondientes al año dos mil veinticuatro

14. Acuerdo del Consejo General, por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el Recurso de Apelación RAP-021/2023. El veinticuatro de enero, este Consejo General, aprobó el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-007/2024[16], mediante el cual se daba cumplimiento a la resolución del Pleno del Tribunal Electoral local, al Recurso de Apelación RAP-021/2023, promovido por el otrora partido político local Hagamos, por lo que se modificó el numeral 3, del artículo 20 de los Lineamientos.

15. Acuerdo del Consejo General, por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el Recurso de Apelación RAP-019/2023 y acumulados, promovido por el partido político Morena y otros. Con fecha trece de febrero, este Consejo General, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-019/2024[17], dio cumplimiento a la resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, del Recurso de Apelación RAP-019/2023, promovido por el partido político Morena y otros, por lo que se modificó el numeral 2, del artículo 18, de los Lineamientos.

---

[15] Consultable en: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-12-15/4iepc-acg-106-2023.pdf
[16] https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-01-24/1iepc-acg-0072024.pdf
[17] https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-02-13/1iepc-acg-019-2024.pdf

16. Modificación al convenio de coalición y a los anexos estadísticos. El quince de febrero, el Consejo General de este Instituto Electoral, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-021/2024[18], aprobó las siguientes modificaciones; por lo que ve a la coalición parcial denominada **"Fuerza y Corazón por Jalisco":** a) al convenio de coalición parcial integrada por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a efecto de postular y registrar las candidaturas a diputaciones y munícipes en el estado de Jalisco; b) a los anexos estadísticos aprobados en el acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-106/2023, correspondientes a los bloques de población y competitividad para la elección a munícipes; y c) al número de fórmulas aprobadas en el acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-106/2023, para atender las disposiciones en favor de las personas en situación de discapacidad y población LGBTTTIQ+.

17. Plazo para la presentación de las solicitudes de registro de las planillas a diputaciones y munícipes. El plazo legal conferido a favor de los institutos políticos acreditados y coaliciones registradas ante el organismo electoral, para la presentación de las solicitudes de registro de sus planillas de candidaturas diputaciones fue del doce al veinticinco de febrero, mientras que, en el caso de munícipes, comenzó el doce de febrero, concluyendo a las veinticuatro horas del día tres de marzo del año en curso. Con excepción de los veinte municipios más poblados de Jalisco, en lo que respecta, a los partidos que integran la coalición parcial denominada **"Fuerza y Corazón por Jalisco**", mismos que contaron con un plazo adicional de cuarenta y ocho horas, tal y como se advierte del acuerdo referido en el punto anterior.

18. Sorteos. El veintiocho de marzo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, llevó a cabo los sorteos relativos a los incumplimientos a las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, en que incurrieron los partidos políticos y coaliciones, al presentar sus planillas y contestar los requerimientos respectivos.

19. De la resolución de las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a diputaciones y munícipes. El treinta de marzo, en la cuarta sesión extraordinaria urgente, este Consejo General, resolvió las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a

[18] Consultable en: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-02-15/1iepc-acg-0212024completo.pdf

diputaciones y munícipes presentadas por las personas candidatas independientes, los partidos políticos acreditados y las coaliciones aprobadas por este Consejo General, para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.

20. Informe sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. El veintiséis de septiembre, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, rindió ante este Consejo General, el Informe sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad[19], mediante el cual se da cuenta del cumplimiento a dichas disposiciones por parte de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, en el registro de candidaturas[20]. Asimismo, en la sesión ordinaria en que se rindiera el presente informe, este Consejo General solicitó se desagregara la información por partido político para una mayor claridad.

21. Memorándum 31/2024 de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral. El diecisiete de octubre, en seguimiento al Informe sobre cumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, que rindiera a este Consejo General, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral el Memorándum 31/204, mediante el cual, la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación, remitió un reporte pormenorizado por partido político, de los incumplimientos al principio de paridad de género, así como a las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Correspondientes al año dos mil veinticinco

22. Inicio de oficio del procedimiento y admisión a trámite. El trece de enero, conforme al resultado arrojado por los informes relativos al incumplimiento al principio de paridad de género, así como a las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, por parte de los partidos políticos y coaliciones, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

[19] https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-09-26/10informecumplimientoparidadgsvpel2023-2024.pdf

[20] En seguimiento al informe descrito, el diecisiete de octubre la Dirección de Género y No Discriminación envió a la Secretaría Ejecutiva, el Memorándum 31/204, mediante el cual remitió un reporte pormenorizado por partido político, de los incumplimientos al principio de paridad de género, así como a las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Electoral inició el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, por el posible actuar negligente del **Partido Revolucionario Institucional,** respecto del incumplimiento a las reglas de paridad, inclusión y acciones afirmativas en favor de grupos históricamente discriminados, radicándose con el número de expediente **PSO-QUEJA-002/2025.** Asimismo, toda vez que la Secretaría Ejecutiva advirtió que no se actualizaba ninguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas por el arábigo 467, del Código Electoral del Estado de Jalisco[21], se ordenó **admitir** el procedimiento y emplazar al **Partido Revolucionario Institucional.** Emplazamiento que se realizó mediante oficio 0030/2025 de la Secretaría Ejecutiva.

23. Contestación al Procedimiento Sancionador Ordinario. El veintitrés de enero, se dio cuenta del escrito signado por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional[22], mediante el cual compareció a dar contestación al Procedimiento Sancionador Ordinario incoado en contra de su representado, asimismo se le tuvo ofreciendo dos medios de convicción.

24. Ampliación del plazo. Mediante proveído de doce de marzo, se determinó ampliar el plazo para llevar a cabo diligencias de investigación dentro del procedimiento.

25. Se da vista. El dieciséis de junio, al haberse agotado las diligencias de investigación ordenadas por esta autoridad y al no existir pruebas pendientes por desahogar, se puso el expediente a la vista del **Partido Revolucionario Institucional**, para que, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Acuerdo que fuera notificado al partido político mediante oficio de Secretaría Ejecutiva número 01106/2025 el dieciocho de junio.

Correspondientes al año dos mil veintiséis

26. Se reservan los autos para formular el proyecto de resolución. El trece de febrero, se reservaron las actuaciones para formular el proyecto de resolución correspondiente.

[21] En adelante Código Electoral.
[22] Registrado bajo el número de folio 00103 de Oficialía de Partes

27. Remisión del proyecto de resolución a la Comisión de Quejas y Denuncias. El dieciséis de febrero, la autoridad instructora remitió el proyecto de resolución a la Comisión de Quejas y Denuncias para su conocimiento y estudio.

28. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. El diecisiete de febrero, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó por unanimidad el proyecto, con el anuncio de un voto concurrente por parte de la Consejera Silvia Guadalupe Bustos Vásquez; y ordenó la remisión del mismo a la Presidencia del Instituto Electoral, para que se diera a conocer a las personas integrantes del Consejo General, para su estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación.

29. Conocimiento del proyecto de resolución por el Consejo General. EL veinte de febrero, la Consejera Presidenta de este Instituto hizo del conocimiento del Consejo General, el proyecto de resolución del procedimiento sancionador elaborado por la Secretaría Ejecutiva y aprobado por la Comisión, para que determinara lo conducente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es competente para resolver los Procedimientos Sancionadores Ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme lo dispuesto en los artículos 12, fracción IV, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 118, párrafo 1, fracciones I y III, inciso g); 120; 134, párrafo 1, fracciones XXII y LI; 460 párrafo 1, fracción I del Código Electoral.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, del artículo 465 del Código Electoral, así como en el artículo 20, párrafo 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto Electoral, el procedimiento para el conocimiento de las infracciones y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

En el párrafo 2, del arábigo 465 del Código Electoral, se establece que la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el término de cinco años.

Ahora bien, en el caso concreto se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en el artículo antes referido, toda vez que, el presente procedimiento se inició de manera oficiosa por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, al tener conocimiento de la posible comisión de una conducta infractora por parte del **Partido Revolucionario Institucional,** conocimiento derivado del Informe sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad de la Comisión de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral, rendido al Consejo General en sesión ordinaria del veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, y como el reporte pormenorizado por partido político, de los incumplimientos al principio de paridad de género, así como a las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, que fuera remitido a la Secretaría Ejecutiva por la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación.

De igual forma, el procedimiento se radicó de manera oportuna, en ejercicio de la facultad que tiene esta autoridad para fincar responsabilidades por infracciones administrativas, siendo que en el caso concreto los hechos materia del presente procedimiento se encuentran dentro del plazo de cinco años establecidos para tal efecto.

TERCERO. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Esta autoridad no advierte que se surta alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en el artículo 467, párrafos 1 y 2 del Código Electoral.

CUARTO. Estudio de fondo

I. HECHOS QUE MOTIVARON EL INICIO DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO

I.1. El incumplimiento a los Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso

Electoral Local Concurrente 2023-2024, en el estado de Jalisco por parte del Partido Revolucionario Institucional

La Secretaría Ejecutiva instauró de oficio el presente procedimiento en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, por su probable responsabilidad al haber omitido cumplir con las reglas de paridad vertical, horizontal y transversal, inclusión y con las acciones afirmativas implementadas en favor de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad establecidas en los Lineamientos correspondientes emitidos por este Instituto Electoral, para el registro de candidaturas a diputaciones, munícipes o regidurías en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.

Ahora bien, las omisiones detectadas, conforme a lo establecido en el *Informe sobre el cumplimiento al principio de paridad de género y las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad*, elaborado por la Comisión de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral y presentado ante el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, así como con base en el reporte pormenorizado por partido político remitido por la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación a la Secretaría Ejecutiva, se presentaron de la siguiente manera:

Diputaciones por el principio de Representación Proporcional	Respecto de los dispuesto en el artículo 25, numeral 3 de los Lineamientos, postula en la posición 2, 6, 7, 8 y 10. El partido concentra 4 de 5 candidaturas de la posición 6 a la 10, es decir, al estar colocadas en la segunda mitad de las primeras 10 posiciones precisamente nos referimos a los últimos lugares. La distribución mayoritaria en posiciones bajas es una concentración indirecta que va en contra del propósito del artículo citado, que busca evitar relegar a estas personas a posiciones de menor visibilidad o competitividad. Por ello, aunque una candidatura se coloque en un lugar competitivo, si las demás candidaturas de estos grupos están concentradas en los últimos lugares de las primeras diez posiciones, se considera que, sigue dando una discriminación estructural dentro de la lista, por lo que no se le tiene cumpliendo la regla.

Grupos en situación de vulnerabilidad	Derivado de la evaluación de las postulaciones requeridas y postulaciones acreditadas de candidaturas en situación de **discapacidad** en las planillas de munícipes, se tiene que el partido postula únicamente 5 de 10 fórmulas que le correspondían.

En concreto, con dichas omisiones se pudo trasgredir el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada lo que impacta en la participación de la vida democrática del estado, en el acceso a la integración de los poderes públicos y en la inclusión y representación de las mujeres y los grupos de atención prioritaria.

II. DEFENSA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Por su parte, el instituto político señaló al momento de dar contestación al procedimiento incoado en su contra que:

- Si bien del reporte que fue generado por la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación, se desprende el incumplimiento relativo a no postular adecuadamente candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, lo cierto es que no se valoró que en la posición 3 tres de la lista de diputaciones de Representación proporcional, corresponde a una mujer joven.
- Los Lineamientos no señalan la obligatoriedad de registrar en los primeros cinco lugares a personas pertenecientes a los grupos históricamente vulnerados; por lo que considera no existe incumplimiento alguno.
- Respecto al incumplimiento de disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, manifiesta que no tuvieron suficientes personas que reunieran con los requisitos para ser consideradas personas con discapacidad y que además aceptaran formar parte de las planillas en aquellos municipios donde se debió postular las fórmulas y completar así, las 10 fórmulas que debieron haber registrado.
- En cuanto al incumplimiento señalado como integrante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, sobre la no postulación de candidaturas jóvenes en los municipios de Mascota, San Sebastián del Osete, Villa Corona, Zapotlanejo y Santa María del Oro, dicha omisión se presentó debido a errores de apreciación e interpretación.

III. PRUEBAS OFRECIDAS

Al respecto, es oportuno señalar que, en el ocurso de contestación presentado por el **Partido Revolucionario Institucional,** se advierten los siguientes medios de convicción:

> *"...PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en aquellas presunciones que en un enlace lógico jurídico se aprecien por esa H. Autoridad resolutora y confirmen lo expresado por el suscrito.*
>
> *INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- La que hago consistir en todo lo que se actúe en el presente procedimiento en favor de mi representado..."*

IV. PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD

La autoridad instructora recabó los medios de prueba que consideró pertinentes, para la debida integración del expediente, siendo las documentales públicas, consistentes en:

- Informe sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, emitido por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral, y;

- El reporte por fuerza política del incumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, elaborado por la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación.

V. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS

En relación con las pruebas aportadas por el **Partido Revolucionario Institucional**, identificadas como *"PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA"* e *"INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES*", dichas probanzas se admitieron de conformidad a lo previsto en el artículo 462, párrafo 3, fracciones V y VI del citado ordenamiento legal, así como 15 y 16 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

VI. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

Por lo que hace a las pruebas recabadas por la autoridad instructora, resultan de entidad probatoria plena y suficiente respecto de su autenticidad y de los hechos ahí descritos, conforme a los artículos 462, párrafo 3, fracción I; y 463, párrafos 1 y 2 del Código Electoral; y 11, párrafo 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral, lo anterior por tratarse de documentos públicos emitidos por una autoridad electoral.

Ahora, por lo que ve a los medios de convicción ofrecidos, identificados como "*PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA*", así como la "*INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES*", las mismas fueron desahogadas por su propia naturaleza, en el momento procesal oportuno y el estudio de estas queda implícito en la presente resolución.

VII. HECHOS ACREDITADOS

Del caudal probatorio y de las demás constancias que integran el expediente, se tiene que los hechos acreditados en el presente procedimiento sancionador son los siguientes:

1. El plazo legal conferido a favor de los institutos políticos acreditados o registrados y las coaliciones registradas ante este organismo electoral, para la presentación de las solicitudes de registro de sus planillas de candidaturas a diputaciones, comenzó el doce de febrero del año dos mil veinticuatro y concluyó a las veinticuatro horas del día veinticinco de febrero del año dos mil veinticuatro.

2. El treinta de marzo de dos mil veinticuatro, el Consejo General del Instituto Electoral, celebró sesión extraordinaria mediante la cual resolvió sobre la procedencia e improcedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a munícipes y diputaciones presentadas por las coaliciones, los partidos políticos y candidaturas independientes, tal como se advierte de los acuerdos disponibles en el orden del

día, consultable en el enlace: https://www.iepcjalisco.org.mx/sesiones-de-consejo/consejo-general/2024-03-30

3. De conformidad con el considerando VIII del Acuerdo del Consejo General identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-021/2024, así como en el Anexo II del mismo documento, el Partido Revolucionario Institucional tenía la obligación legal de postular diez fórmulas de candidaturas en situación de discapacidad, distribuidas en los bloques de alta población y en los bloques de alta y media competitividad.

4. De conformidad con el artículo 25 de los Lineamientos, el Partido Revolucionario Institucional debió incluir en los primeros diez lugares de la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, por lo menos a una persona que pertenezca a cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, sin que puedan concentrarse de forma exclusiva en los últimos lugares de las primeras diez posiciones.

5. El treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral, emitió el Informe sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, así como las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024; del que se desprende la información relativa a las omisiones de los partidos políticos a los Lineamientos de este Instituto Electoral.

6. A efecto de aclarar la información contenida en el informe descrito en el punto que antecede, la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación rindió el reporte pormenorizado, por partido político, de los incumplimientos al principio de paridad de género, así como a las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad

7. Del contenido del informe y reporte referidos se desprende, en esencia, que el **Partido Revolucionario Institucional incurrió en las siguientes conductas:**

- En lo relativo a la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, en favor de personas en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminadas, concentró cuatro de las cinco candidaturas en las posiciones comprendidas del sexto al décimo lugar.
- Únicamente postuló cinco de las diez fórmulas de **personas con discapacidad**, que le fueron requeridas para integrar las planillas de munícipes en cumplimiento de las disposiciones aplicables

VIII. CASO EN CONCRETO

Al respecto, corresponde determinar lo conducente respecto al incumplimiento del **Partido Revolucionario Institucional** a las disposiciones previstas en los Lineamientos aplicables, durante el registro de candidaturas dentro del plazo establecido en el Código Electoral y en el Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024. Lo anterior, con base en los resultados contenidos en el informe aprobado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como en el reporte pormenorizado elaborado por la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación, cuyos contenidos se detallan a continuación:

A) Diputaciones por el principio de representación proporcional: Incumple la regla contemplada en el artículo 25, numeral 3 de los Lineamientos, al concentrar 4 de 5 candidaturas de la posición 6 a la 10, correspondientes a personas integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad.

B) Implementación de acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad: Se advierte que el partido político postula únicamente 5 de las 10 fórmulas requeridas correspondientes a personas con discapacidad.

Además, se deberá determinar si derivado de las omisiones descritas, se pudo trasgredir el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada lo que impacta en la participación de la vida democrática del estado, en el acceso a la integración de los poderes públicos y en la inclusión y representación de las mujeres y los grupos de atención prioritaria.

IX. MARCO JURÍDICO

IX.1 Principio constitucional de paridad de género

En los artículos 35, fracción II y 41, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el principio de paridad de género, el cual es una concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en el ámbito político-electoral.

El mandato de igualdad y no discriminación por motivos de género, previsto en el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución General, debe entenderse a partir del reconocimiento de la situación de exclusión sistemática y estructural en la que se ha colocado a las mujeres de manera histórica en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Esa lectura del principio de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres se ha materializado en los artículos 6, inciso a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer[23]; 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[24].

Asimismo, otra perspectiva del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en el ámbito político, se concreta en el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres, de conformidad con los artículos 4, inciso j) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer[25]; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre

---

[23] La disposición convencional referida establece que: "[e]l derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación [...]".

[24] Los preceptos señalados disponen lo siguiente:
"Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2. Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer [...]".

[25] A continuación, se establece el contenido de los preceptos convencionales precisados: "Artículo 7. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; [...]".

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[26]; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer[27].

Así, el adecuado entendimiento del mandato de paridad de género supone partir de que tiene por principal finalidad aumentar –en un sentido cuantitativo y cualitativo– el acceso de las mujeres al poder público y su incidencia en todos los espacios relevantes. Lo que se traduce en la exigencia de adoptar medidas especiales y de establecer tratamientos diferenciados dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad material de las mujeres, la cual tiene fundamento en los artículos 4, numeral 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[28]; y 7, inciso c) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer[29].

IX.2 ***Acciones afirmativas***

En materia político-electoral, las acciones afirmativas implican que los partidos políticos deben registrar un cierto número de candidaturas integradas por personas de grupos históricamente discriminados, para participar en la contienda electoral por un cargo de elección popular, tanto en el principio de mayoría relativa, como de representación proporcional[30].

---

[26] El precepto convencional de referencia establece lo siguiente: "[l]os Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: […] b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales […]" (énfasis añadido).

[27] En las disposiciones señaladas se establece lo siguiente: "Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna".

[28] En el mencionado artículo se establece que: "[l]a adopción por los Estados Parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato".

[29] El precepto convencional citado dispone lo siguiente: "[l]os Estados Parte condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […]c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso […]".

[30] Lo anterior ha sido acogido por diversas autoridades y órganos jurisdiccionales al denominarlo como "cuotas" asignadas a estos grupos, concepto que será utilizado en lo sucesivo.

El objetivo de las acciones afirmativas es asegurar a las personas que pertenecen a grupos de situación de discriminación se encuentren presentes y/o representadas en los procesos electorales, primero, y en la toma de decisiones públicas, una vez que hayan sido electas.

En el escenario nacional, la implementación de este tipo de acciones se establece, en términos generales, en los artículos 5, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por otra parte, la doctrina señala que las acciones afirmativas –y las cuotas como uno de sus mecanismos de aplicación–, procuran la igualdad de resultados. Son mecanismos correctivos de una situación anómala, con el fin de disminuir las distancias económicas, sociales y de otra índole, entre integrantes de una sociedad. Establecen medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados grupos de personas, con el propósito de corregir discriminaciones o desigualdades que resultan de los sistemas sociales, políticos o económicos[31].

Con relación a las acciones afirmativas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[32] ha señalado que constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales; y asimismo, que este tipo de acciones se caracteriza por ser: *temporal*, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; *proporcional*, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como *razonables y objetivas*, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado[33].

---

[31] Torres, Isabel, Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad, en: Revista IIDH. Volumen No. 47 (Enero-junio). IIDH. Costa Rica, 2009, p. 235

[32] En lo sucesivo Sala Superior

[33] Cfr.: Jurisprudencia 30/2014, con el título: "ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN", en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, pp. 11 y 12.

IX.3 Disposiciones a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad

El artículo 1° de la Constitución Federal, declara que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El derecho a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva, protege tanto a personas como a grupos sujetos a vulnerabilidad, a efecto de erradicar las discriminaciones estructurales que operan en contra de aquéllos, con el objeto de que se disminuyan o erradiquen los obstáculos sociales, políticos, económicos, culturales o de cualquier otra índole que les impidan gozar a plenitud del resto de derechos constitucional y convencionalmente reconocidos a su favor, que en el caso concreto, se traducen en los obstáculos históricos, políticos y sociales. Es necesario que las autoridades competentes instrumenten acciones afirmativas, entendidas como medidas compensatorias para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial[34].

La histórica exclusión que han vivido algunos grupos considerados en situación de vulnerabilidad de los asuntos públicos ha disminuido en los últimos años, sobre todo gracias a la gran presión que éstos han ejercido por conseguir un marco constitucional y normativo que proteja y garantice sus derechos, incluidos los derechos políticos y electorales. Sin embargo, aún queda mucho para lograr que esta inclusión deje de ser meramente formal.

Así, en la actualidad gran cantidad de personas se enfrentan sistemática y reiteradamente a múltiples barreras para el ejercicio pleno de sus derechos, en virtud de un amplio abanico de prácticas discriminatorias que afectan de manera desproporcionada a grupos sociales específicos que, de hecho, constituyen la mayoría de la población nacional.

[34] Ver sentencia SUP-JDC-10263/2020

En otras palabras, los grupos contextual o históricamente excluidos o en desventaja comparten un rasgo común que los identifica: existe una historia de discriminación, de prejuicios sociales negativos contra dichos colectivos, susceptibles de ser reforzados por la normativa, lo cual disminuye la posibilidad de defensa de los intereses del colectivo.

IX.4 Sobre el registro de candidaturas y la integración de los poderes públicos

En nuestro sistema jurídico, el derecho de solicitar el registro de personas candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las personas ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente, previo cumplimiento de los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Así, una de las principales vías para que las personas puedan ser votadas a través de elecciones libres, auténticas y periódicas para la integración de los órganos públicos, es mediante la postulación de candidaturas a través de los partidos políticos, a quienes el Poder Constituyente les otorgó el carácter de "entidades de interés público", dada la relevancia de los fines que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les atribuye, consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

En el sistema electoral mexicano, se establecen dos formas de ejercer el derecho de la ciudadanía de ser votada para acceder a algún cargo de elección popular, ya sea de carácter federal o local. La primera es a través de la postulación por conducto de los partidos políticos y la segunda, mediante la figura de candidaturas independientes.

Respecto de los partidos políticos, es necesario precisar que, si bien es cierto que estas entidades de interés público tienen la facultad constitucional y legal de autorregularse y organizarse libremente, estableciendo por ejemplo, sus principios ideológicos, sus programas de gobierno o legislativos y la manera de realizarlos, su estructura orgánica, las reglas democráticas para acceder a los cargos directivos y a las candidaturas a cargos de elección popular, los mecanismos para el control de la regularidad partidaria, el régimen disciplinario de dirigentes, servidores partidarios, afiliados y militantes y otras de similar naturaleza; también lo es que, esa capacidad auto organizativa no es ilimitada.

Esto, debido a que se encuentra constreñida a la satisfacción de los principios del Estado democrático y al cumplimiento de los fines constitucionales inherentes a los partidos políticos, como lo es promover la participación del pueblo en la vida democrática, hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público y garantizar la paridad entre géneros, a fin de respetar los derechos político-electorales de sus afiliados, entre otros.

Entonces, los partidos políticos cuentan con una amplia libertad para determinar su organización y regulación interna, así como los programas, principios e ideas que postulan; sin embargo, dicha libertad no es irrestricta, pues debe sujetarse a los parámetros mínimos determinados por la ley, con el fin de lograr un equilibrio razonable entre su libertad de autodeterminación, el cumplimiento de sus fines y la potenciación de los derechos políticos fundamentales de sus personas militantes y afiliadas.

Los partidos políticos deben asegurar a la ciudadanía y a sus personas afiliadas las vías de acceso al ejercicio del poder público, como es garantizar la nominación en las candidaturas a cargos de elección popular y su registro ante los organismos electorales, a efecto de que estas estén en aptitud de poder presentar su oferta electoral ante la ciudadanía y ser votadas el día de la jornada electoral.

Tales obligaciones pueden verse implícitamente establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, específicamente al regular los derechos y obligaciones de los institutos políticos, en tanto que el artículo 23, párrafo 1, incisos b), y e), enuncia sus derechos para participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I, del artículo 41, de la Constitución y a organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones.

A la par, el artículo 236 del Código Electoral, establece que *"Es derecho de los partidos políticos, coaliciones y todos los ciudadanos, de forma independiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones previstos en La Ley General y este Código, solicitar el registro de candidatos... ";* de lo que se sigue que, si la normativa local reconoce el derecho de los partidos políticos para registrar candidaturas, implícitamente trae aparejado su correlativa obligación para los institutos políticos de garantizar el derecho de la ciudadanía y sus personas afiliadas, militantes o simpatizantes.

X. ANÁLISIS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A FAVOR DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS.

Ahora bien, en el ámbito de las **disposiciones a favor de las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados**, como se estableció previamente, el veinte de julio pasado se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto número 29235/LXIII/23, mediante el cual se reformaron los artículos 2, 4, 24, 134, 237, 241 y 251; y se adicionó al título tercero el Capítulo Primero Bis denominado "Disposiciones Generales aplicables en favor de diversos Grupos en Situación de Vulnerabilidad", así como los artículos 15 Bis, 15 Ter, 15 Quater, 15 Quinquies, 15 Sexies, 15 Septies, 15 Octies y 237 Bis 1, del Código Electoral.

Esta reforma legal establece medidas que tienen como finalidad instrumentar la forma en que los partidos políticos deben cumplir con su obligación de presentar las candidaturas de acuerdo con los fines que tienen previstos, en condiciones de igualdad y libres de discriminación.

En este sentido, en la legislación local, se establecieron medidas compensatorias a favor de personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual, personas migrantes y juventudes.

En relación con ello, en el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-106/2023 se aprobó la metodología para la verificación de las disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad en coaliciones para la elección de diputaciones y munícipes para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.

En dicho acuerdo, se estableció que, para la postulación a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos en lo individual debían observar la postulación, en los primeros diez lugares de la lista de candidaturas por lo menos a una persona que perteneciera a cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados que pertenecieran a los siguientes grupos:

a. Personas que se autoadscriban como indígenas;

b. Personas en situación de discapacidad;
c. Personas de la población LGBTTTIQ+;
d. Personas jóvenes; y
e. Personas jaliscienses residentes en el extranjero.

En consecuencia, de la normatividad establecida en la Constitución local y el Código Electoral, las disposiciones que fueran instrumentalizadas por este Instituto Electoral para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, en favor de los grupos en situación de situación de vulnerabilidad fueron las siguientes:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE. Para garantizar la participación de las personas de este grupo poblacional, los partidos políticos y las coaliciones debían postular candidaturas atendiendo los criterios de igualdad y proporcionalidad en que se sustenta en el artículo 15 Bis numeral 1 del Código Electoral del Estado de Jalisco.

El artículo 24, numeral 3, último párrafo del Código Electoral, indica en lo que interesa, que tomando en consideración el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los partidos políticos o coaliciones deberían postular una fórmula de personas con discapacidad dentro de las planillas de un porcentaje de municipios equivalente a la población del grupo en situación de vulnerabilidad.

El referido principio de proporcionalidad fue retomado y desdoblado con las normas administrativas contenidas en los Lineamientos, pues los artículos 17 y 18 establecen que, cada partido político y coalición debían postular una fórmula en la cantidad de municipios equivalente a la proporción del grupo en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Lineamientos, de los datos estadísticos recabados por las áreas de esta autoridad administrativa electoral, se determinó que **los partidos políticos y coaliciones debían destinar por lo menos una fórmula de personas de la población con discapacidad en el 15.15% de los 125 municipios, es decir, una fórmula integrada por personas de dicho sector, en al menos, 19 municipios.**

Así, la postulación de fórmulas de personas con discapacidad debía realizarse de manera ponderada. Es decir, debía realizarse en los bloques de alta población y en los bloques de alta y media competitividad. Asimismo, cada candidatura propietaria postulada mediante la disposición en favor de personas en situación de discapacidad debía tener por suplente a una candidatura perteneciente al mismo grupo.

Haciendo hincapié que, tal disposición es aplicable para los partidos políticos y las coaliciones totales porque considera un porcentaje respecto del total de los municipios de la entidad federativa.

Lo anterior es así, en el entendido que los partidos políticos que integran las coaliciones no postulan candidaturas en la totalidad de los ayuntamientos, por lo que, asignan o distribuyen determinada cantidad de postulaciones para cada uno de los partidos conformantes de acuerdo con lo establecido en el propio convenio de coalición. De la misma manera, en los municipios que no son objeto de asociación política electoral, los partidos conservan el derecho de postular candidaturas en lo individual.

Esto quiere decir que, la cantidad de municipios en donde deberían postularse personas pertenecientes a alguno de estos grupos en situación de vulnerabilidad no guardaría una relación proporcional con el total de municipios que se encuentran disponibles para cada uno de los partidos políticos coaligados en atención a que no existe una obligación de asignarlos igualitariamente entre los integrantes de la unión.

A consecuencia de ello, se desarrollaron ciertas exigencias del referido principio de postulación para el escenario de las coaliciones, bajo el cual, se estableció un porcentaje mínimo de municipios en los que los partidos debían postular al menos una fórmula integrada por personas de dichos sectores que resultara equivalente a la porción que representa el sector vulnerable en el total de la población de esta entidad federativa.

Entonces, para el caso de los partidos políticos coaligados, como lo es el del **Partido Revolucionario Institucional,** la postulación de candidaturas correspondientes a personas con discapacidad se considera tanto de lo postulado en lo individual, como de aquellos municipios en los que encabeza dentro de la coalición.

En suma, para la determinación de los acuerdos estadísticos, en el acuerdo IEPC-ACG-106/2023, este Instituto, una vez obtenido el número de municipios en los que podía postular cada partido político coaligado, calculó el número de fórmulas que representa dicho porcentaje, con relación a las 19 fórmulas establecidas por el artículo 18 de los Lineamientos.

De esta manera, con el resultado de dicha operación se determinó el número de fórmulas que cada partido debió registrar en favor del sector de personas con discapacidad, independientemente de que dichas postulaciones se realizaran dentro o fuera de la coalición.

Posteriormente, mediante acuerdo del Consejo General **IEPC-ACG-021/2024,** se tuvo por recibida, la solicitud de modificación al convenio de coalición, donde entre otras cosas se aprobó un cambio en el número de municipios en los que participarían coaligados los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y, de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición denominada "Fuerza y Corazón por Jalisco", así como el ajuste respectivo a los partidos que encabezarían las candidaturas.

En ese contexto, de la modificación de mérito, se tuvo que los partidos políticos integrantes acordaron coaligarse en las candidaturas a diputaciones en los veinte distritos electorales y en 124 municipios, quedando únicamente excluido Jilotlán de los Dolores.

En tal sentido, se tiene que, el **Partido Revolucionario Institucional** dentro de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, encabezaría las candidaturas en 59 municipios, los cuales se enlistan a continuación:

Municipios encabezados por el PRI	
AHUALULCO DE MERCADO	OJUELOS DE JALISCO
AMECA	PIHUAMO
ARANDAS	PONCITLAN
ATENGO	SAN GABRIEL
ATENGUILLO	SAN IGNACIO CERRO GORDO
ATOTONILCO EL ALTO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE
ATOYAC	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
AUTLÁN DE NAVARRO	SANTA MARÍA DEL ORO

AYOTLAN	TALA
CABO CORRIENTES	TALPA DE ALLENDE
CASIMIRO CASTILLO	TECOLOTLAN
CIHUATLÁN	TECHALUTA DE MONTENEGRO
COCULA	TENAMAXTLÁN
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	TEOCALTICHE
CUQUÍO	TEOCUTITLÁN DE CORONA
EL GRULLO	TIZAPAN EL ALTO
EL SALTO	TOLIMAN
GUACHINANGO	TONALA
HUEJUQUILLA EL ALTO	TONAYA
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	TONILA
IXTLAHUACÁN DEL RÍO	UNION DE TULA
JALOSTOTITLAN	VILLA CORONA
JUCHITLÁN	VILLA GUERRERO
LA BARCA	VILLA PURIFICACIÓN
LAGOS DE MORENO	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
MAGDALENA	ZACOALCO DE TORRES
MASCOTA	ZAPOPAN
MAZAMITLA	ZAPOTITLAN DE VADILLO
MIXTLAN	ZAPOTLANEJO
OCOTLAN	

En consecuencia, se establecieron para el **Partido Revolucionario Institucional** las siguientes obligaciones para la postulación de candidaturas de personas con discapacidad, en las planillas a munícipes:

						TOTAL DE FÓRMULAS A PRESENTAR A FAVOR DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PARTIDO POLÍTICO	MUNICIPIOS QUE ENCABEZA EN COALICIÓN	MUNICIPIOS QUE PUEDE POSTULAR DE FORMA INDIVIDUAL	TOTAL DE MUNICIPIOS EN LOS QUE PODRÁ POSTULAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO	% DE MUNICIPIOS QUE PODRÁ POSTULAR EL PARTIDO (respecto los 125 municipios)	FÓRMULAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A POSTULAR

PRI	59	1	60	125	**48.00%**	**10**

De lo anterior se tiene que, el **Partido Revolucionario Institucional** tenía la obligación de postular, al menos, 10 fórmulas conformadas por personas con discapacidad, independientemente de si lo hacía en lo individual o a través de los municipios que encabezaba en la coalición denominada **Fuerza y Corazón por Jalisco**.

Entonces, en relación con la evaluación de las postulaciones requeridas y acreditadas de candidaturas en situación de discapacidad correspondientes al **Partido Revolucionario Institucional,** del informe que dio origen al presente procedimiento se advierte que dicho instituto político únicamente registró cinco de las diez fórmulas que le correspondían, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, lo cual se ilustra a continuación:

	Total de fórmulas postuladas en bloques de población, alta y media votación		Obligación de postulación		Evaluación			
Fórmulas postuladas	**5**		10		**Incumplimiento**			
	Alta población – alta	Alta población – baja	Alta – alta	Alta – baja	Media	Baja – alta	Baja – baja	Bloque sin competitiividad
Fórmulas postuladas	1	0	3	1	0	0	0	0

En la siguiente tabla se muestran las fórmulas postuladas mediante esta disposición en donde puede advertirse el municipio, la posición y el bloque de competitividad.

Candidaturas en situación de discapacidad postuladas por el Revolucionario Institucional, según el bloque de competitividad

	Municipio	#	Calidad	Bloque de competitividad
1	MAGDALENA	7	PROPIETARIA	Alta – alta
	MAGDALENA	7	SUPLENTE	Alta – alta
2	SAN IGNACIO CERRO GORDO	7	PROPIETARIA	Alta – alta
	SAN IGNACIO CERRO GORDO	7	SUPLENTE	Alta – alta

3	TONALA	4	PROPIETARIA	Alta población – alta
	TONALA	4	SUPLENTE	Alta población – alta
4	TONAYA	3	PROPIETARIA	Alta – alta
	TONAYA	3	SUPLENTE	Alta – alta
5	ZAPOTITLAN DE VADILLO	5	PROPIETARIA	Alta – baja
	ZAPOTITLAN DE VADILLO	5	SUPLENTE	Alta – baja

En consecuencia, al no alcanzar la postulación obligada, se le tiene por incumplida la disposición.

XI. ANÁLISIS DEL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Ahora bien, previo a determinar, en su caso, la configuración de la infracción atribuida al **Partido Revolucionario Institucional**, se estima necesario realizar un análisis respecto a las disposiciones relativas a la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, dado que las diferentes fuerzas políticas tenían que constreñirse a las reglas de postulación para grupos en situación de vulnerabilidad en las listas de representación proporcional, que de conformidad con los Lineamientos establecen lo siguiente:

> ***Artículo 25***
>
> *1. En atención a lo dispuesto en el artículo 237 bis del Código, los partidos políticos y coaliciones deberán incluir, en los primeros diez lugares de la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional,* ***por lo menos, a una persona que pertenezca a cada uno de los grupos que se enlistan a continuación****, sin dejar de respetar la alternancia de géneros.*
>
> ***a)*** *Personas que se autoadscriban como indígenas;*
> ***b)*** *Personas en situación de discapacidad;*
> ***c)*** *Personas de la población LGBTTTIQ+;*
> ***d)*** *Personas jóvenes, y*
> ***e)*** *Personas jaliscienses residentes en el extranjero.*

2. En el caso de que los partidos políticos y coaliciones postulen una fórmula de cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados antes referidos por el principio de mayoría relativa, se tendrá por cumplida la obligación de postulación contenida en el presente artículo, respecto del grupo de que se trate.

3. Para efecto de atender a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución y el artículo 3 párrafos 4 y 5 de la Ley de Partidos, las postulaciones destinadas a personas pertenecientes a los referidos grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados no podrán concentrarse de forma exclusiva en los últimos lugares de las primeras diez posiciones de la lista de diputaciones de representación proporcional. Asimismo, en caso de que las personas pertenecientes a estos grupos sean postuladas en distritos de mayoría relativa, tampoco se admitirán esquemas que concentren a las candidaturas de los diversos en grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados en los distritos de menor competitividad del partido o coalición correspondiente.

Bajo esa tesitura, se advierte que el **Partido Revolucionario Institucional** cumple en postular 5 candidaturas de personas pertenecientes a los 5 grupos enlistados en la regla 1 del artículo 25 de los Lineamientos, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Posición	Género	Disposición
1	M	
2	H	Candidatura joven
3	M	
4	H	
5	M	
6	H	Diversidad sexual
7	M	Persona indígena
8	H	Persona con discapacidad
9	M	
10	H	Jalisciense residente en el extranjero

No obstante, del análisis de dichas postulaciones se advierte que el **Partido Revolucionario Institucional** registró candidaturas en las posiciones 2, 6, 7, 8 y 10, motivo por el cual los informes que dieron origen al presente procedimiento señalan que dicho instituto político

concentró cuatro de las cinco candidaturas en las posiciones comprendidas del sexto al décimo lugar.

Es decir, el análisis de la tabla antes expuesta, si bien es correcto que el Partido Revolucionario Institucional registra cinco candidaturas pertenecientes a los grupos previstos en la regla 1 del artículo 25 de los Lineamientos, también se advierte que **cuatro de ellas —esto es, el 80%— se ubican en las posiciones 6, 7, 8 y 10, es decir, en los últimos lugares de los primeros diez sitios de la lista.**

Esta distribución no es irrelevante ni puede considerarse una simple cuestión ordinal, sino que impacta directamente en el cumplimiento sustantivo de la acción afirmativa. Lo anterior porque, conforme al propio diseño de las listas de representación proporcional, la ubicación determina en gran medida la visibilidad y la expectativa de acceso real al cargo, por lo que colocar de manera sistemática a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad en posiciones bajas constituye un patrón de relegación, aun cuando formalmente se cumpla con el número.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia 11/2015 de rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES" señala que, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son:

> a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.
>
> b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y
>
> c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más

conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.

Con lo anterior, la norma busca desaparecer la brecha histórica de desigualdad a la que se han enfrentado las personas integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad. Donde la desigualdad radica en que se restringe el derecho humano que tienen las personas para ser nombrados para cualquier cargo público, siempre que cumplan con las cualidades o requisitos que establezca la ley.

En ese tenor, la acción afirmativa prevista en el artículo 25 de los Lineamientos no se limita a una obligación numérica, sino que exige evitar prácticas que reproduzcan la desigualdad que se pretende erradicar. Así lo ha sostenido el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al señalar que, en materia de acciones afirmativas, debe privilegiarse una interpretación finalista, orientada a impedir simulaciones y a maximizar la representatividad de los grupos destinatarios.

Así, puede definirse la acción de concentrar como *"reunir en un centro o punto lo que estaba separado*[35]*",* lo que se estima ocurre en el presente caso, al encontrarse postuladas las candidaturas de forma mayoritaria en la posición 7, 8, 9 y 10.

Por ello, aun cuando una de las candidaturas se ubique en un lugar competitivo, la concentración mayoritaria de las demás en posiciones bajas dentro del mismo tramo analizado (1 a 10) revela un patrón que contraviene el propósito medular de la medida afirmativa, pues impide que las personas de estos grupos gocen de una oportunidad real y equitativa de acceder al cargo. De aceptarse esta forma de postulación, bastaría cumplir numéricamente y colocar todas las candidaturas afirmativas en los últimos lugares, lo que vaciaría de contenido la finalidad de la norma.

En consecuencia, este Consejo General estima que la distribución presentada por el instituto político **no satisface el cumplimiento sustantivo de la acción afirmativa, al perpetuar la desigualdad estructural que la medida busca corregir; y por tanto, se aparta del espíritu y objeto del artículo 25 de los Lineamientos.**

Dicho lo anterior, si bien el partido sostiene que no se tomó en consideración que en la posición tercera de la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional

[35] https://dle.rae.es/concentrar

se postuló a una mujer joven, lo cierto es que el artículo 25 de los Lineamientos establece como requisito mínimo la postulación de personas pertenecientes a los cinco grupos en situación de vulnerabilidad que ahí se señalan, a saber:

a) *Personas que se autoadscriban como indígenas;*
b) *Personas en situación de discapacidad;*
c) *Personas de la población LGBTTTIQ+;*
d) *Personas jóvenes, y*
e) *Personas jaliscienses residentes en el extranjero.*

En ese sentido, al no haberse acreditado el cumplimiento del requisito señalado, resulta inoperante lo alegado por el partido, toda vez que la observancia de la disposición normativa debe atender al cumplimiento integral del principio de inclusión previsto en dicha hipótesis, esto es, a la obligación de postular a personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad antes referidos, sin que resulte suficiente —ni relevante para efectos de cumplimiento— la postulación de una mujer joven en la tercera posición de la lista.

Asimismo, en relación con el argumento expuesto por el Partido Revolucionario Institucional respecto del supuesto incumplimiento atribuido en su calidad de integrante de la coalición "Fuerza y Corazón por Jalisco", consistente en la no postulación de candidaturas jóvenes en los municipios de Mascota, San Sebastián del Oeste, Villa Corona, Zapotlanejo y Santa María del Oro, resulta improcedente su consideración, toda vez que el presente procedimiento no fue instaurado en contra de la coalición, sino exclusivamente en contra del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de las obligaciones que le correspondían de manera directa e individual; por lo que dicho argumento no tiene incidencia en la materia de análisis ni modifica las conclusiones que se deriven del presente procedimiento.

En otro orden de ideas, respecto del incumplimiento atribuido al Partido Revolucionario Institucional en relación con la postulación de candidaturas a munícipes pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente personas con discapacidad, si bien dicho instituto político argumenta no haber contado con suficientes personas que reunieran los requisitos para ser consideradas como tales y que, además, aceptaran integrar las planillas en los municipios donde correspondía realizar dichas postulaciones, lo cierto es que

tanto el Código Electoral como la Ley General de Partidos Políticos establecen la obligación de los partidos de garantizar la participación efectiva de todas las personas.

En ese sentido, las acciones afirmativas implementadas por las autoridades electorales tienen como finalidad saldar una deuda histórica con las personas integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los partidos políticos tienen como uno de sus fines promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política, razón por la cual los institutos políticos están compelidos a promover dicha participación efectiva, garantizando la inclusión y la diversidad en la integración de los órganos de gobierno.

De tal manera que, son los propios institutos políticos quienes tienen el deber de garantizar que la participación de la ciudadanía sea efectiva y respetada, en condiciones igualitarias y competitivas.

En consecuencia, se estima que el **Partido Revolucionario Institucional ha incurrido en la infracción relativa al incumplimiento del Lineamiento mediante la omisión de diversas obligaciones que se reflejan al tenor siguiente**:

> 1. Concentrar de forma mayoritaria sus candidaturas de personas en situación de vulnerabilidad, en las últimas cinco posiciones de los primeros diez lugares de la lista de diputaciones por representación proporcional.
> 2. Respecto al cumplimiento de disposiciones a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, se tiene que el **Partido Revolucionario Institucional** únicamente postula 5 de 10 fórmulas, integradas por personas con discapacidad, que le correspondían.

XII. RESPONSABILIDAD

Como ha quedado acreditado en autos, resulta inconcuso que, al omitir **el Partido Revolucionario Institucional** de cumplir con las reglas de paridad e implementar disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones, munícipes y sindicaturas durante el Proceso Electoral Local

Concurrente 2023-2024, se pudo trasgredir el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada lo que impacta en la participación de la vida democrática del estado, en el acceso a la integración de los poderes públicos y en la inclusión y representación de las mujeres y los grupos de atención prioritaria.

XIII. CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN, DETERMINACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada la existencia de la infracción a la normatividad electoral, así como la responsabilidad, por parte del **Partido Revolucionario Institucional**, se procede a imponer la sanción correspondiente, tomando en consideración las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma.

En principio, el derecho sancionador electoral se identifica con las generalidades del derecho sancionador administrativo, habida cuenta que consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona, de un hecho identificado y sancionado por las normas electorales.

Una de las facultades de la autoridad en el ámbito del derecho sancionador, es la de reprimir conductas que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales, tales como:

- Que se busque adecuación; es decir, considerar la gravedad de la infracción, las circunstancias en que esta se cometió, así como las condiciones particulares del infractor;
- Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para individualizar la sanción, el grado de participación de cada implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar;
- Eficacia: esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas, pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado constitucional, democrático de derecho.
- Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención general.

- La consecuencia de esta cualidad es disuadir la comisión de conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la materia electoral.

Como se ha referido, el procedimiento sancionador no solo es la represión de una conducta ilícita, sino también un medio de reacción para tomar medidas eficaces para corregir los posibles vicios que pudieron alterar el proceso electoral.

La Sala Superior, en el SUP-RAP-17/2006[36], fue más allá de los ámbitos del derecho administrativo sancionador, al establecer que, el orden jurídico electoral debe ser regularmente mantenido por la autoridad electoral, haciendo prevalecer no sólo los principios constitucionales rectores de la función estatal electoral, como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, sino también los principios que debe cumplir toda elección para ser considerada válida, particularmente durante un proceso electoral, garantizando en todo momento que la contienda se ajuste a tales principios, resultando en una elección libre y auténtica en los términos del segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución federal.

A partir de los parámetros citados, se realiza la calificación e individualización de la infracción con base en elementos objetivos concurrentes, en específico, se deberá establecer si la infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de graduarlas como levísimas, leves o graves, de conformidad con la clasificación establecida en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Una vez calificadas, procede localizar la clase de sanción que legalmente corresponda para cada una de estas, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices:

- La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla).

[36] https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/sup-rap-017-2006-

- Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
- El tipo de infracción, y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.
- Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

En términos generales, la determinación de la falta como levísima, leve o grave, corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley, la que se considere adecuada.

Es oportuno precisar que, al momento de graduar la sanción que legalmente corresponda, entre las previstas en la normativa aplicable, deberá atenderse a los resultados del ejercicio de valoración realizado. En caso de que la sanción contemple un rango mínimo y máximo, su determinación deberá efectuarse considerando las circunstancias particulares del caso, a fin de garantizar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida impuesta.

Esto guarda relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-3/2015 y sus acumulados.

XIV. CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Así, para calificar debidamente la falta, en el presente asunto se deberán valorar los siguientes elementos:

XIV.1Infracción imputada, hechos que la actualizan y normativa aplicable.

Del análisis de las constancias que integran el expediente, se advierte que se actualiza la infracción prevista por el artículo 447, fracción II, del Código Electoral del Estado de Jalisco, pues el partido político incumplió el acuerdo IEPC-ACG-106/2023 emitido por el Consejo

General, con relación a los Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas.

El incumplimiento motivo de infracción deriva de **la omisión a obligaciones contenidas en los Lineamientos que se reflejan al tenor siguiente:**

- Incumplimiento a las resoluciones o acuerdos del Consejo General de este Instituto, en concreto de los Lineamientos, así como del acuerdo IEPC-ACG-106/2023 por:

  a) La **concentración de candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad, en las últimas cinco posiciones de los diez primeros lugares de la lista de diputaciones por representación proporcional** y,
  b) **Omisión en el cumplimiento de la obligación de postular la totalidad de las fórmulas requeridas correspondientes a personas con discapacidad**, ya que, de las **diez fórmulas exigidas**, el partido **únicamente registró cinco** al momento de solicitar el registro de sus candidaturas

Los hechos antes descritos y debidamente probados en el presente procedimiento sancionador, encuadran en lo dispuesto por el artículo 447, fracción II, del Código Electoral del Estado de Jalisco, que se transcribe a continuación:

> Artículo 447.
> 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
> …
> II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral;

En ese sentido, el partido político incumplió con su obligación de observar los acuerdos del IEPC Jalisco, situación especialmente relevante, por tratarse de acuerdos cuya finalidad es la integración paritaria y plural de los órganos representativos de elección popular. Se trata de reglas que responden al contenido de los artículos 3, 4 y 25, párrafo primero, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos; 68, 236, párrafo 3; 237; 237 Bis 1; 237 Bis Ter; 237 Quáter; y 447, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral.

De tal manera que, el **Partido Revolucionario Institucional** incumplió con la obligación de observar los acuerdos de este organismo electoral, pues tal y como se acreditó pasó por alto el contenido del acuerdo IEPC-ACG-106/2023 emitido por el Consejo General de este Instituto Electoral, que protegen una finalidad esencial de interés público, como lo es el cumplimiento del mandato constitucional de paridad, y que tiene por objeto garantizar la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad.

XIV.2 Bien jurídico tutelado

Con dicha infracción se trasgredió el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada lo que impacta en la participación de la vida democrática del estado, en el acceso a la integración de los poderes públicos y en la inclusión y representación de las mujeres y los grupos de atención prioritaria.

XIV.3 Singularidad o pluralidad de las faltas

En el presente caso, se advierte que la conducta sancionada reviste carácter de singular, puesto que se trata de una infracción a los Lineamientos a través de la omisión de de implementar las acciones afirmativas en favor de personas en situación de vulnerabilidad; a detalle:

- La omisión en cumplir con la obligación de postular candidaturas de diputaciones bajo el principio de representación proporcional provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad evitando concentrarlas en los últimos lugares de la lista del en las posiciones del uno al diez;

- La omisión de postular las diez fórmulas de candidaturas a munícipes de la ciudadanía con discapacidad; y

Lo anterior a cargo y bajo la responsabilidad del mismo sujeto, es decir, del **Partido Revolucionario Institucional**.

XIV.4 Reiteración

Este Órgano Colegiado estima que **no se actualiza la reiteración de la conducta**, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido, al resolver el expediente **SUP-RAP-85/2006**[37], que la reiteración se configura cuando existe la **vulneración sistemática de una misma obligación a lo largo del tiempo**, diferenciándose de la reincidencia, la cual presupone la repetición de una infracción previamente sancionada.

De dicho criterio se desprende que la reiteración exige, para su acreditación:

a) la **pluralidad de conductas autónomas**, y

b) su **actualización sucesiva o persistente en el tiempo**, elementos que deben verificarse de manera objetiva y no inferirse de forma extensiva o analógica, en atención a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador.

En el caso concreto, la obligación atribuida al partido político denunciado —relativa al cumplimiento de las reglas de paridad y de acciones afirmativas en el registro de candidaturas— se configura como un **deber jurídico único**, cuyo **momento de exigibilidad** se actualiza exclusivamente durante el periodo legalmente previsto para la presentación de solicitudes de registro.

Así, la conducta imputada se consumó en un **solo momento procedimental**, correspondiente a la etapa de registro de planillas y fórmulas, la cual se desarrolló dentro de un plazo cierto y previamente determinado por la normativa electoral aplicable. En consecuencia, **no resulta jurídicamente válido fraccionar dicha conducta por municipio, planilla o fórmula**, pues ello implicaría desagregar artificialmente un mismo incumplimiento normativo para construir una pluralidad de infracciones inexistente.

En ese tenor, este Órgano Colegiado considera pertinente precisar que la configuración de la reiteración exige una repetición sucesiva de la conducta infractora en el tiempo, supuesto que no se actualiza en el presente caso. En efecto, el incumplimiento atribuido al partido

[37] https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-00085-2006

político se consumó en un solo momento procedimental, al inobservar los Lineamientos aplicables, actualizando una única infracción conforme al Código Electoral. Esta circunstancia resulta insuficiente para tener por acreditada la sistematicidad que caracteriza a la figura de la reiteración.

Sostener lo contrario implicaría desnaturalizar esta agravante y permitir su aplicación con base únicamente en los efectos de la conducta, en contravención a los principios de **tipicidad estricta, legalidad y seguridad jurídica** que rigen la potestad sancionadora de las autoridades electorales.

Este razonamiento es consistente con el criterio sostenido por el **Tribunal Electoral del Estado de Jalisco**, al resolver el expediente **RAP-006/2025**[38], en el que se determinó que el artículo 459, numeral 5, del Código Electoral local establece parámetros para la graduación de las sanciones, **sin contemplar la reiteración como una agravante diferenciada**, así como que el plazo para la presentación de solicitudes de registro constituye una **unidad procedimental**, por lo que la conducta no puede fragmentarse para construir artificialmente una repetición.

Así, la autoridad jurisdiccional local razona la necesidad que la autoridad administrativa electoral analice si se trata de una o varias conductas, estableciendo de manera fundada y motivada el grado de culpabilidad con base a dichos elementos.

Dicho criterio resulta relevante, en tanto reconoce que la autoridad administrativa no puede introducir agravantes no previstas expresamente por el legislador, ni flexibilizar los estándares del derecho sancionador bajo interpretaciones extensivas en perjuicio del sujeto infractor.

Por lo anterior, es que este Órgano Colegiado reconoce que el cumplimiento de las normas de paridad y de las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad constituye un **mandato constitucional y convencional de carácter estructural**; no obstante, ello **no autoriza a prescindir de las garantías propias del derecho administrativo sancionador**, ni a redefinir los elementos de una infracción o agravante sin base normativa expresa.

[38] Consultable en: https://www.triejal.gob.mx/rap-006-2025/

En consecuencia, la tutela reforzada de la paridad sustantiva debe armonizarse con los principios de **legalidad, proporcionalidad y certeza jurídica**, evitando que la agravación de la sanción se sustente en construcciones interpretativas que no encuentran respaldo en la normativa aplicable ni en la jurisprudencia del Tribunal Electoral.

Por las razones expuestas, este Órgano Colegiado concluye que no se acredita la reiteración de la conducta, toda vez que en el presente caso no existe una pluralidad de infracciones autónomas, sino el incumplimiento de una obligación prevista en los Lineamientos, cuya inobservancia actualiza una única infracción en términos de lo dispuesto por el Código Electoral. En consecuencia, el presupuesto normativo para considerar la agravante de reiteración no se configura en el caso concreto.

Entonces, la conducta atribuida debe analizarse y, en su caso, sancionarse como una **infracción única**, atendiendo a los criterios de graduación previstos en la legislación electoral aplicable.

XIV.5 Circunstancias de modo, tiempo y lugar

Modo. La conducta consistió en el incumplimiento del partido político infractor de presentar el número de fórmulas requeridas integradas por personas con discapacidad y en la concentración de candidaturas correspondientes a los grupos en situación de vulnerabilidad, en las últimas cinco posiciones de los diez primeros lugares de la lista de diputaciones por representación proporcional. Conducta que se llevó a cabo a través del Sistema Integral para el Registro de Candidaturas.

Tiempo. La conducta cometida ocurrió durante el desarrollo del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, específicamente en la etapa de presentación de las solicitudes de registro de candidaturas; esto es, del doce de febrero al tres de marzo en el caso de munícipes, y en el caso de diputaciones del doce al veinticinco de febrero, todos del año dos mil veinticuatro.

Lugar. La omisión en que incurrió el partido político infractor se dio en el estado de Jalisco, al ser la entidad en la que se llevó a cabo el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024,

a través de la plataforma designada para el registro de candidaturas, denominada Sistema Integral para el Registro de Candidaturas (SIRC).

XIV.6 Condiciones externas y medios de ejecución

En la especie, debe tomarse en consideración que el medio de ejecución corresponde a los formatos utilizados durante el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, en el registro de candidaturas, contenidos en los "LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES EN FAVOR DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES Y MUNÍCIPES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL CONCURRENTE 2023-2024 EN EL ESTADO DE JALISCO", lo anterior a través del SIRC, de donde se advirtió la omisión del partido político infractor.

XIV.7 Beneficio o lucro

El Código Electoral establece en el numeral 459, párrafo 5, fracción VI, que, para la individualización de las sanciones, se deberán tomar en cuenta diversas circunstancias, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, es decir, sólo cuando la autoridad advierta algún beneficio, lucro, daño o perjuicio, se procederá a calcular su monto.

En el caso que nos ocupa, no se acredita beneficio económico o lucro a favor del partido político con motivo de la comisión de las infracciones materia de estudio.

XIV.8 Intencionalidad (comisión dolosa o culposa)

En virtud de que los principios del derecho penal resultan aplicables a los procedimientos sancionadores administrativos[39], con base en los principios de debido proceso legal y acusatorio, íntimamente relacionados con el principio de presunción de inocencia, es que

[39] "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL." La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122.

la autoridad resolutora tiene que acreditar la existencia de todos los elementos de las infracciones a sancionar, entre ellos, el dolo. En efecto, el principio acusatorio establece que corresponde a la autoridad administrativa la función persecutoria de las infracciones y, por ende, la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de estos.

Corolario de lo anterior, ha sido criterio del Tribunal Electoral local, que la autoridad instructora funge, además de investigadora, como un ente acusador, por lo que se encuentra obligada a formular una imputación de conductas ilícitas a partir de los elementos probatorios de los que pudo allegarse[40].

En ese sentido, este órgano colegiado considera que la conducta reprochada al **Partido Revolucionario Institucional** reviste el carácter de **culposa**, ya que, del análisis de lo expuesto por este, así como de las actuaciones que integran el presente procedimiento, no se advierten elementos para considerar que la violación a la norma fuera cometida de manera intencional, por lo que no es posible identificar la existencia de dolo o mala fe en el actuar del partido.

XIV.9 Reincidencia

De conformidad con el artículo 459, párrafo 6 del Código Electoral, se considerará reincidente, al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la Ley General y el Código Electoral, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

No se acredita la reincidencia en el presente caso, toda vez que no existe antecedente en la entidad de la imposición de sanción alguna por este motivo.

XV. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

[40] jurisprudencia 16/2011, de rubro "*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA*"

Al respecto, el Reglamento de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, en el artículo 24 establece que para efectos de graduar la infracción cometida conforme a la gravedad e individualizar la sanción en virtud de lo dispuesto por el artículo 459, párrafo 5 del Código Electoral, deberá atender a su calificación, pudiendo ser **levísima, leve o grave (ordinaria, especial o mayor),** debiendo tomar en consideración la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión de dicho bien; el peligro o riesgo causado por la infracción; y en su caso, la dimensión del daño.

A través de la individualización de la sanción, se busca castigar a los actores políticos de manera personalizada por las infracciones cometidas durante los procesos electorales, en lugar de aplicar sanciones genéricas a los partidos políticos o coaliciones.

Se debe garantizar que las sanciones sean proporcionales y consistentes, evitando cualquier tipo de sesgo político o selectividad en su aplicación.

El criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, será tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

Entonces, se tiene que la conducta desplegada por el **Partido Revolucionario Institucional** fue de carácter singular, sin que exista la reiteración de infracciones o reincidencia, de ahí que se estima que no existen situaciones que pudieran agravar la sanción que este Órgano Colegiado determine imponer.

Así no debemos olvidar que las sanciones poseen una función inhibitoria, pilar de los procedimientos sancionadores, pues con ellas se busca reducir la comisión de infracciones apelando a la racionalidad de los sujetos, al sopesar los costos y beneficios de sus acciones. De ahí la necesidad de ajustar la proporcionalidad de las mismas para que, sin resultar excesivas logren su cometido.

En ese sentido, si bien de las candidaturas postuladas por el partido político en cuestión se advierte una intención de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en los Lineamientos en materia de paridad de género e inclusión de grupos de atención prioritaria, lo cierto es que dicha intención resulta insuficiente. Ello, porque del análisis pormenorizado de las postulaciones referido en los apartados que anteceden se desprende la necesidad de disuadir al partido político para que, en lo sucesivo, adopte e implemente de manera efectiva las acciones necesarias y pertinentes que permitan materializar, desde la etapa de registro de candidaturas, la igualdad sustantiva y, con ello, compensar o remediar las condiciones de desventaja estructural que han enfrentado las personas que integran los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por tanto, atendiendo a los elementos objetivos y considerando que la conducta desplegada por el **Partido Revolucionario Institucional,** consistió en la omisión de cumplir con las obligaciones de implementar disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, de forma específica respecto a personas con discapacidad, en la postulación de candidaturas a munícipes; y, la concentración de candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad, en las últimas cinco posiciones de los diez primeros lugares de la lista de diputaciones por representación proporcional. Afectando con ello, el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada, consistente en la participación en la vida democrática del estado y el acceso a la integración de los poderes públicos, frente al derecho sustancial de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad; cuya omisión fue calificada como **culposa** en líneas que anteceden, por lo que, esta autoridad determina que la conducta desplegada por el **Partido Revolucionario Institucional** debe calificarse como **levísima**.

La anterior calificación obedece a que la conducta desplegada por el **Partido Revolucionario Institucional** reviste un carácter aislado y no sistemático, al no advertirse la reiteración de infracciones ni la actualización de reincidencia, aunado a que no existen elementos que permitan inferir la presencia de dolo o mala fe por parte de dicho instituto político, sino, en todo caso, una actuación deficiente atribuible a circunstancias de carácter operativo o material.

En ese sentido, se estima que, en atención a los elementos que existen, así como a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que rigen el ejercicio de la

potestad sancionadora; este órgano estima que es procedente imponer una sanción de esta índole.

Ello es así, pues del análisis del universo total de candidaturas postuladas y encabezadas por el partido político, tanto de manera individual como en coalición, se desprende la existencia de una intención manifiesta de cumplir con los espacios exigidos por la normativa electoral para ser ocupados por mujeres y por personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, la omisión advertida no puede calificarse como una negativa deliberada o una exclusión estructural, sino como una deficiencia que no logra materializar en su totalidad el objetivo normativo.

En el caso concreto, si bien es posible identificar y cuantificar el número de candidaturas que no fueron postuladas conforme a los principios de paridad de género y de acciones afirmativas en favor de grupos en situación de desventaja histórica, la dimensión sustantiva de la afectación a los derechos político-electorales —en particular, el derecho a ser votado de las personas pertenecientes a dichos grupos, así como el derecho de la ciudadanía a votar y participar en la vida democrática del Estado— no es susceptible de medición objetiva, en tanto se trata de supuestos no verificables como lo sería determinar cuáles candidaturas habrían resultado electas o en qué medida concreta se habría modificado la voluntad popular.

En ese contexto, aun cuando se tiene por acreditada la infracción imputable al partido político, este Instituto se encuentra legalmente obligado a modular la carga sancionadora de manera congruente con la entidad real de la infracción, atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora.

Bajo ese contexto, se estima que el partido político **Revolucionario Institucional** inobservó el contenido de la normatividad aludida en la presente resolución, lo que puso en riesgo el derecho de acceso a la integración de los poderes públicos y a la representación de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

Lo anteriormente expuesto, es de conformidad con la Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "**PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA**

PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO."

Es decir, a partir de los factores enlistados previamente, en cuanto a la singularidad, condiciones de modo, tiempo y lugar, así como el bien jurídico tutelado y la afectación producida, entre otros; procede la individualización de la sanción en dichos términos, partiendo que la conducta sancionada constituye una vulneración directa a disposiciones de carácter constitucional.

Ahora bien, conforme al artículo 458, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral, las sanciones susceptibles de imponer a los partidos políticos son:

a) *Con amonestación pública;*
b) *Con multa de hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta;*
c) *Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;*
d) *Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público para actividades ordinarias que les corresponda, por el periodo que señale la resolución, dependiendo de la gravedad de la falta. Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución*
e) *Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;*
f) *Con multa de hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la violación a lo dispuesto en la fracción XVI del párrafo 1 del artículo 68 de este Código, así como tratándose de incumplimiento a las*

obligaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. La reincidencia durante las precampañas y campañas electorales, se podrá sancionar hasta con la supresión total de las prerrogativas de acceso a radio y televisión, hasta por un mes o por el periodo que señale la resolución;

g) *Cancelación del registro si se trata de partidos políticos locales, o la supresión total hasta por tres años del financiamiento público para actividades ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales acreditados, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes aplicables y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como por el incumplimiento de sus obligaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.*

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos[41] protegidos y los efectos de la misma, las circunstancias atenuantes, así como la conducta, se determina que el partido político infractor debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que esta deje de atender con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 458, párrafo 1, fracción I, inciso a) del Código Electoral, consistente en **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, es suficiente y adecuada, toda vez que la conducta culposa del partido político ha sido calificada como **levísima**, es decir, la de menor gravedad contemplada por el Código Electoral del Estado de Jalisco.

En este sentido, la proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción aplicable exige que, al haber sido clasificada con el grado mínimo posible, la consecuencia jurídica también sea la mínima prevista, conforme al principio de legalidad y justicia sancionadora. Imponer

[41] Véase la tesis XXVIII/2003 de rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES".

cualquiera de las sanciones previstas en los incisos b), c), d), e), f) o g) del precepto mencionado —todas ellas de mayor severidad— resultaría desproporcionado y contrario a la lógica de lo argumentado en el cuerpo de la presente resolución, ya que implicaría una respuesta más gravosa de la que la infracción justifica. Por tanto, la **amonestación pública** no sólo es procedente, sino que se considera como la única sanción razonable y jurídicamente adecuada al caso concreto.

Así, de la Tesis IV/2018[42] emitida por la Sala Superior del máximo tribunal electoral, se advierte que para la **individualización** de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de ejecución; e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado.

Sin embargo, dichos elementos no se listan como una secuencia de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, pues lo importante es que todos ellos sean considerados adecuadamente por la autoridad y sean la base de la **individualización** de la sanción, lo que para el caso concreto ha quedado debidamente puntualizado.

Bajo esa tesitura, la Sala Superior al resolver el diverso SUP-REP-647/2018[43], ha sustentado que, conforme a los fines de la sanción, es importante destacar que, en materia electoral, esta se distingue debido a que su naturaleza es fundamentalmente preventiva y no retributiva; por tanto, se perseguirá que proporcione los fines relacionados con la prevención general y especial, de acuerdo con los propósitos que orientan el sistema de las sanciones. De ahí que, las sanciones deban ser adecuadas y considerar la gravedad de la infracción, proporcional y tomar en cuenta para individualizarla el grado de participación de cada implicado y eficaz; ello, en la medida en la que se acerque a un ideal de consecuencia mínima necesaria para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en peligro.

---

[42] Tesis IV/2018. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN ORDEN DE PRELACIÓN. - Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2018&tpoBusqueda=S&sWord=individualizaci%C3%B3n

[43] Consultable en: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REP-0647-2018-

En ese contexto, la imposición de una **amonestación pública** al partido **Revolucionario Institucional** se estima proporcional, idónea y eficaz para cumplir con la función de disuadir al referido ente político para que en lo futuro implemente las acciones necesarias en favor de las mujeres y los grupos históricamente discriminados.

De esta manera, a partir de una óptica interseccional, este Órgano Colegiado garantiza el cumplimiento en lo futuro de las normas que buscan desaparecer la brecha histórica de desigualdad y la apertura de mayores espacios, donde las personas en situación de vulnerabilidad puedan ocupar un cargo público, siempre que cumplan con las cualidades o requisitos que establezca la ley.

En conclusión, por las consideraciones anteriores se procede a imponer al **Partido Revolucionario Institucional** la sanción consistente en **amonestación pública,** establecida en el inciso a), fracción I, del párrafo 1 del artículo 458 del Código Electoral.

Para una mayor publicidad de la sanción que se impone al **Partido Revolucionario Institucional**, la presente resolución deberá publicarse en su oportunidad, en la página de internet de este organismo electoral, en el apartado relativo a resoluciones de sanciones (**Sujetos Sancionados**).

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 12, fracción IV, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 118, párrafo 1, fracción I; 120, párrafo 1; 134, párrafo 1, fracciones XXII y LI; 460 párrafo 1, fracción I del Código Electoral del Estado de Jalisco y 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, este Consejo General,

R E S U E L V E:

Primero. Se declara la existencia de la infracción atribuida al **Partido Revolucionario Institucional**, derivada de la omisión en que incurrió, por las razones precisadas en el considerando **Cuarto** de la presente resolución.

Segundo. Se impone al **Partido Revolucionario Institucional**, la sanción consistente en **Amonestación Pública.**

Tercero. En su oportunidad, publíquese la presente resolución en la página de internet de este organismo electoral en el apartado de resoluciones de sanciones (sujetos sancionados).

Cuarto. Notifíquese personalmente al **Partido Revolucionario Institucional**.

Quinto. Notifíquese a las personas integrantes del Consejo General, mediante el correo electrónico registrado ante este Instituto.

Sexto. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Guadalajara, Jalisco; a 25 de febrero de 2026
"20 años del voto electrónico en Jalisco 2006-2026"

Mtra. Paula Ramírez Höhne	**Mtro. Christian Flores Garza**
La consejera presidenta	**El secretario ejecutivo**

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el acuerdo del Consejo General identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063/2023"

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO	DD-IEPC-0010
SECUENCIA DE DOCUMENTO	60483348
SELLO DIGITAL	69a5ddce0fec6b255764fdb7
ESTAMPILLADO	2026-03-02T12:58:17.000-0600

FIRMANTE CHRISTIAN FLORES GARZA / CHRISTIAN.FLORES@IEPCJALISCO.MX

FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR

NjA0ODMzNDh8UG9saXRpY2EgRXN0YW1wYSBUaWVtcG89MS4zLjYuMS40LjEuOTIwMy4yLjEsIERpZ2VzdGlvbiBFc3
RhbXBhIFRpZW1wbz0zMDU4NTRFQjkxM0NCREFCRTBBNDM5QkFFNDQyQTlFRDk3QzAzMDcwMzM0NENCNjBFMzBFMjE4
RDExMjAyQzc2LCBOdW1lcm8gU2VjdWVuY2lhIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTQzNTIwMDk0LCBGZWNoYSBFbWlzaW9uIE
VzdGFtcGEgVGllbXBvPTIwMjYwMzAyMTg1ODE3Wg==

SITIO DE VALIDACIÓN https://portalvalidacion.jalisco.gob.mx/#/resultado/16D266E7CDF85F4C16E56F5DAD67FF4A

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO	DD-IEPC-0010
SECUENCIA DE DOCUMENTO	60483602
SELLO DIGITAL	69a5e3c30fec6b255764fe76
ESTAMPILLADO	2026-03-02T13:23:41.000-0600

FIRMANTE PAULA RAMIREZ H?HNE / PAULA.RAMIREZ@IEPCJALISCO.MX

FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR

NjA0ODM2MDJ8UG9saXRpY2EgRXN0YW1wYSBUaWVtcG89MS4zLjYuMS40LjEuOTIwMy4yLjEsIERpZ2VzdGlvbiBFc3
RhbXBhIFRpZW1wbz1FOTc1RTQzNUM4Mzg3RTkzRDJGMDA0NUZCRERBQ0JDQ0RFQjU3OTJCQzRDOTU2Q0JCRjc2NDEx
NDhBNUNCRDEwLCBOdW1lcm8gU2VjdWVuY2lhIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTQzNTIwMzQ4LCBGZWNoYSBFbWlzaW9uIE
VzdGFtcGEgVGllbXBvPTIwMjYwMzAyMTkyMzQxWg==

SITIO DE VALIDACIÓN https://portalvalidacion.jalisco.gob.mx/#/resultado/745274A0C23B499365330AF64C4C942F

El presente documento ha sido firmado electrónicamente, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, con el mismo valor jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; en términos de lo previsto en los artículos 8, 9, 10 y 12 de los Lineamientos para el Uso y la Operación de la Firma Electrónica Avanzada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063-2023.

El suscrito secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con fundamento en lo establecido por los artículos 143, numeral 2, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de Jalisco; 10, numeral 1, fracción V, y 45, numerales 1, 3, 5 y 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, hago constar que la presente resolución se emitió en la primera sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el 25 de febrero de 2026 y fue aprobada, en lo general, por votación mayoría de seis votos a favor de las personas consejeras electorales Carlos Javier Aguirre Arias, Melissa Amezcua Yépiz, Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora y la consejera presidenta Paula Ramírez Höhne; y un voto en contra de la consejera electoral, Zoad Jeanine García González, quien anuncio la presentación de un voto particular.

En votación particular, se sometió a consideración el apartado relativo al análisis de la reiteración de la conducta, toda vez que la consejera electoral Silvia Guadalupe Bustos Vázquez manifestó su separación del criterio contenido en dicho punto. Realizada la votación correspondiente, el apartado fue aprobado en los términos originalmente propuestos en el proyecto, con cuatro votos a favor de las personas consejeras electorales Carlos Javier Aguirre Arias, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Claudia Alejandra Vargas Bautista y la consejera presidenta Paula Ramírez Höhne; y tres votos en contra de las consejeras electorales Zoad Jeanine García González, Melissa Amezcua Yépiz y Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, estas dos últimas anunciando la presentación de un voto concurrente.

Mtro. Christian Flores Garza
El secretario ejecutivo

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el acuerdo del Consejo General identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063/2023"

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO	DD-IEPC-0004
SECUENCIA DE DOCUMENTO	60483337
SELLO DIGITAL	69a5dd880fec6b255764fdac
ESTAMPILLADO	2026-03-02T12:57:06.000-0600

FIRMANTE	CHRISTIAN FLORES GARZA / CHRISTIAN.FLORES@IEPCJALISCO.MX
FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR	NjA0ODMzMzd8UG9saXRpY2EgRXN0YW1wYSBUaWVtcG89MS4zLjYuMS40LjEuOTIwMy4yLjEsIERpZ2VzdGlvbiBFc3RhbXBhIFRpZW1wbz1ENEVCQjJFMDhGN0YxNDQzRjI4Mjg1QTQyRTlCQjIzRDM5OUJBODc1QzkzRkRBOTYyQ0E4NjUzQTYyMTc2RjRELCBOdW1lcm8gU2VjdWVuY2lhIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTQzNTIwMDgzLCBGZWNoYSBFbWlzaW9uIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTIwMjYwMzAyMTg1NzA2Wg==
SITIO DE VALIDACIÓN	https://portalvalidacion.jalisco.gob.mx/#/resultado/2787335F194E032162B4A884C35BB76D

El presente documento ha sido firmado electrónicamente, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, con el mismo valor jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; en términos de lo previsto en los artículos 8, 9, 10 y 12 de los Lineamientos para el Uso y la Operación de la Firma Electrónica Avanzada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063-2023.

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA MELISSA AMEZCUA YÉPIZ, RESPECTO AL ESTUDIO DE FONDO QUE SE DESPRENDE DEL APARTADO REITERACIÓN CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INSTAURADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RADICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSO-QUEJA-002/2025

De conformidad con el artículo 50, párrafos 2 y 4 del Reglamento de sesiones del Consejo Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco[1], la que suscribe Consejera Melissa Amezcua Yépiz, emito Voto Concurrente respecto del estudio y la determinación de la no reiteración en la resolución que nos ocupa, apartado que corresponde al estudio del considerando XVI. Calificación de la Infracción, donde se desprende del mismo el punto XVI.4 Reiteración.

Formulo Voto Concurrente en la presente resolución, ya que, si bien acompaño el sentido de los puntos resolutivos y la imposición de la sanción correspondiente, me aparto de las consideraciones relativas a la inexistencia de la reiteración como elemento para la individualización de la sanción.

Desde mi perspectiva nos encontramos ante un acto reiterado, en tanto se advierte la comisión de conductas sustancialmente similares en momentos distintos, elementos que en conjunto hacen materialmente posible que se configure la figura de la reiteración.

En la resolución que nos ocupa se determina que no se configura la reiteración de la conducta sancionada, bajo el argumento del precedente

[1] En lo sucesivo, Instituto Electoral.

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación[2], en el expediente SUP-RAP-85/2006[3].

A través del cual sostienen lo siguiente:

> *La reiteración se configura cuando existe la vulneración sistemática de una misma obligación a lo largo del tiempo, diferenciándose de la reincidencia, la cual presupone la repetición de una infracción previamente sancionada.*
>
> *De dicho criterio se desprende que la reiteración exige, para su acreditación:*
>
> *a) la pluralidad de conductas autónomas, y*
>
> *b) su actualización sucesiva o persistente en el tiempo, elementos que deben verificarse de manera objetiva y no inferirse de forma extensiva o analógica, en atención a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador.*

Mi disenso radica en que, de lo previamente citado **no es posible deducir los elementos que se mencionan a efecto de determinar que no se configura la reiteración.**

Para lo cual me permito citar la porción de dicha resolución, a efecto de dilucidar mi desacuerdo.

> *(…)*
>
> *"En consecuencia, conforme a tales directrices, es evidente que la calificación de las faltas que se consideren demostradas, tarea a cargo del órgano sancionador, debe comprender el examen de los siguientes aspectos:*
>
> *a) Al tipo de infracción (acción u omisión);*
> *b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó;*

[2] En lo sucesivo, Sala Superior.
[3]Consultable: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-00085-2006

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;

d) La trascendencia de la norma trasgredida;

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron producirse;

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia;

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas;

En tanto que en la individualización de la sanción, consecuencia directa de la calificación de la falta, la autoridad electoral a efecto de ajustarse al principio de legalidad que consagra en la materia el numeral 41 de nuestra Carta Fundamental, deberá considerar, además de los datos ya examinados para tal calificación, una serie adicional de elementos que le permitan asegurar, en forma objetiva, conforme a criterios de justicia y equidad, el cumplimiento de los propósitos que impulsan la potestad sancionadora que le ha sido conferida.

A saber:

i. La calificación de la falta o faltas cometidas;

ii. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta;

iii. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia); y,

iv. Finalmente, que la imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Las indicadas circunstancias, atinentes al hecho, al infractor y a la magnitud de la falta, en opinión de esta Sala, en su conjunto, objetivamente colocan al órgano en posibilidad de concretizar la potestad punitiva que le ha sido dada, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, garantizando así que la consecuencia jurídica que fundada y motivadamente determine, corresponda a las circunstancias específicas que priven en cada caso,

y además, en un plano de superior importancia, que en su ejercicio se cumplan los objetivos que persigue la facultad punitiva, los fines retributivo y de ejemplaridad de la sanción, con los cuales se busca resarcir al Estado la lesión o daño resentidos con la infracción y, a la par, disuadir al resto de los sujetos en quienes impacta la norma, sobre la intención de obviarla.
(..)

Por lo que, desde mi perspectiva, la conclusión adoptada en dicha resolución deriva de una interpretación al concepto de reiteración así como los elementos mencionados **que no es posible sustentar con el pronunciamiento en cita de Sala Superior.**

Por otro lado, en el caso concreto, se establece que la conducta imputada al Partido Revolucionario Institucional actualiza la causal prevista en el artículo 447, fracción II, del Código Electoral del Estado de Jalisco[4] pues dicho partido incumplió con lo dispuesto en el acuerdo IEPC-ACG-106/2023 emitido por este Consejo General del Instituto Electoral, a través del cual se aprobaron los Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024[5].

Además, en la presente resolución *se concluye que la acción imputada se consumó en un solo momento procedimental, correspondiente a la etapa de registro de planillas y fórmulas pues ello implicaría desagregar artificialmente un mismo incumplimiento normativo para construir una pluralidad de infracciones inexistente.*

[4] [4] En lo sucesivo, Código Electoral.
[5] En lo sucesivo, Lineamientos de Paridad e Inclusión.

De lo anterior es mi criterio sostener que, **sí se configura la reiteración** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 fracciones II y III del Código Electoral, que a la letra dice lo siguiente:

> ***Artículo 212***.
>
> *1. Para efectos de este Código, el proceso electoral comprende las etapas siguientes:*
>
> I. *Preparación de la elección;*
> II. *Presentación de las solicitudes de registro de candidatos;*
> III. *Otorgamiento del registro de candidatos y aprobación de sustituciones;*
> IV. *Campañas Electorales;*
> V. *Ubicación de las casillas Electorales e integración de las mesas directivas de casilla, así como la publicación de ambos datos;*
> VI. *Acreditamiento de representantes de partidos políticos y coaliciones, ante mesas directivas de casilla;*
> VII. *Elaboración y entrega de la documentación y material electoral;*
> VIII. *Jornada electoral;*
> IX. *Resultados Electorales;*
> X. *Calificación de las elecciones; y*
> XI. *Expedición de constancias de mayoría y asignación de representación proporcional*.

Con lo anterior se puede concluir que el registro de planillas **no se agota con la sola presentación de estas**, sino que para que este Instituto pueda llegar a la etapa de otorgamiento del registro de candidaturas, existen una serie de mecanismos a efecto de que el partido político cumpla con lo dispuesto en los Lineamientos de Paridad e Inclusión.

Lo mismo se desprende del **Título Sexto, Del Incumplimiento en la Postulación Paritaria de las Candidaturas contenido en los Lineamientos de paridad e Inclusión**, con relación a lo dispuesto por **el artículo 237 párrafo 5 del Código Electoral**, donde se establecen diversos mecanismos, como son los requerimientos, reacomodos y sorteos a efecto de que los partidos políticos cumplan con lo requerido.

Lo anterior también encuentra sustento en el precedente dictado por la Sala Superior en el expediente **SUP-RAP-241/2008[6], en lo que interesa se desprende lo siguiente:**

> ***Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.***
>
> *Al respecto, esta autoridad considera que la conducta desplegada por el partido responsable, en cuanto a la infracción bajo análisis, no puede considerarse como reiterada o sistemática, en virtud de que la misma fue única y se agotó en un solo acto (emisión del acuerdo del 5º Pleno Extraordinario del VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática) y para su materialización, no fueron implementados mecanismos adicionales tendentes a realizarla.*

Con lo anterior se deduce que, la reiteración **se configura bajo el esquema de no ser un solo acto procedimental, o que en su caso para la materialización de este se llevaron a cabo mecanismos adicionales.**

Como ya se expresó en líneas anteriores, el incumplimiento del partido no deriva de un solo acto, -la presentación de las planillas-, **sino que los incumplimientos subsistieron** aún después de que este Instituto les haya requerido, haya realizado los acomodos necesarios o incluso la necesidad de agotarlo hasta los sorteos.

También es necesario precisar que no puede calificarse como un **incumplimiento generalizado** a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Paridad e Inclusión, pues es posible identificar con claridad cuáles fueron las conductas específicas observadas. Asimismo, desde mi perspectiva, no pueden homologarse incumplimientos que derivan directamente de un mandato constitucional con aquellos previstos en la normativa local, aun cuando ambos tengan su origen en las

[6] Consultable: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-241-2008

reglas emitidas para operativizar los mandatos legales y constitucionales a través de los propios Lineamientos de Paridad e Inclusión.

Por último me gustaría hacer énfasis en que, de los incumplimientos que resultaron de los partidos políticos, es que se **han tomado como insumo y un argumento clave para la construcción de los Lineamientos de Paridad e Inclusión para el Proceso Electoral Local 2026-2027**, para evitar omisiones y simulaciones, de ahí que, generalizarlos y determinar que no hubo reiteración, es desde mi perspectiva ir en retroceso porque no se está visibilizando el impacto real y diferenciado que estos incumplimientos tienen en los procesos electorales y en el ejercicio de los derechos político-electorales a través de los cuales se debe garantizar la representación paritaria de las mujeres como un mandato constitucional, así como la inclusión efectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad en la integración de los poderes públicos.

Guadalajara, Jalisco, a 25 de febrero de 2026

MELISSA AMEZCUA YÉPIZ

CONSEJERA ELECTORAL

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO	DD-IEPC-0006
SECUENCIA DE DOCUMENTO	60465646
SELLO DIGITAL	69a1ec510fec6b25576432d7
ESTAMPILLADO	2026-02-27T12:50:20.000-0600

FIRMANTE	MELISSA AMEZCUA YEPIZ / MELISSA.AMEZCUA@IEPCJALISCO.MX
FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR	NjA0NjU2NDZ8UG9saXRpY2EgRXN0YW1wYSBUaWVtcG89MS4zLjYuMS40LjEuOTIwMy4yLjEsIERpZ2VzdGlvbiBFc3RhbXBhIFRpZW1wbz1DRkM1RTU4RkU0RTU1NTc0QzdEOTNBRkY5MkREQTZFNzY1Qzc0RjM1MThEN0MwQTc2MDcyNzZEQzdBQUZCNTc2LCBOdW1lcm8gU2VjdWVuY2lhIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTQzNTAyMzkyLCBGZWNoYSBFbWlzaW9uIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTIwMjYwMjI3MTg1MDIwWg==
SITIO DE VALIDACIÓN	https://portalvalidacion.jalisco.gob.mx/#/resultado/CB8CB4EB0DA3941D70734AB884079B84

El presente documento ha sido firmado electrónicamente, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, con el mismo valor jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; en términos de lo previsto en los artículos 8, 9, 10 y 12 de los Lineamientos para el Uso y la Operación de la Firma Electrónica Avanzada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063-2023.

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA SILVIA GUADALUPE BUSTOS VÁSQUEZ RESPECTO AL ESTUDIO DE LA REITERACIÓN QUE SE DESPRENDE DEL ESTUDIO DEL FONDO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSO-QUEJA-002/2025; PRONUNCIADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO DURANTE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉS.

De conformidad con el artículo 50, párrafos 2 y 4 del Reglamento de sesiones del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la suscrita Consejera Silvia Guadalupe Bustos Vásquez emito voto concurrente respecto del estudio realizado en el aparatado de la "REITERACIÓN", visible en el considerando CUARTO respectivo de la resolución pronunciada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el procedimiento sancionador ordinario con número de expediente PSO-QUEJA-002/2025 durante la cuarta sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, en los siguientes términos:

Lo anterior, en congruencia con el voto concurrente que sostuve desde la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el pasado diecisiete de febrero y debido a que nuevamente sostengo, en esta ocasión, ante Consejo General; que el aspecto de la **REITERACIÓN** sí se actualiza, contrario a lo que se determina en la resolución en cita; de ahí que me separo de dicho criterio y a continuación expongo las consideraciones al respecto.

En la resolución aprobada en lo general por la mayoría, se establece que **no se configura la figura de la reiteración de la conducta**, bajo el argumento de

que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido, - en el expediente SUP-RAP-85/2006 - **que la reiteración se actualiza cuando existe la vulneración sistemática de una misma obligación a lo largo del tiempo**, diferenciándose de la reincidencia, la cual presupone la repetición de una infracción previamente sancionada.

Al respecto, se señala que de dicho criterio se desprende que la reiteración exige, para su acreditación dos elementos en particular:

1) la pluralidad de conductas autónomas, y

2) su actualización sucesiva o persistente en el tiempo, elementos que deben verificarse de manera objetiva y no inferirse de forma extensiva o analógica, en atención a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador.

Sin embargo, mi motivo de disenso radica en que, en mi opinión, ninguno del par de elementos citados se desprende del razonamiento aludido; contrario a ello, analizada en todas sus partes y extremos, de la resolución invocada se deduce que, más bien, la Sala Superior en el tema que nos ocupa refirió en la página 34 los siguientes aspectos que transcribo de manera textual:

> *(...)*
>
> *"En consecuencia, conforme a tales directrices, es evidente que la calificación de las faltas que se consideren demostradas, tarea a cargo del órgano sancionador, debe comprender el examen de los siguientes aspectos:*
>
> *a) Al tipo de infracción (acción u omisión);*
> *b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó;*
> *c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;*
> *d) La trascendencia de la norma trasgredida;*

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron producirse;
f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia;
g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas;

En tanto que en la individualización de la sanción, consecuencia directa de la calificación de la falta, la autoridad electoral a efecto de ajustarse al principio de legalidad que consagra en la materia el numeral 41 de nuestra Carta Fundamental, deberá considerar, además de los datos ya examinados para tal calificación, una serie adicional de elementos que le permitan asegurar, en forma objetiva, conforme a criterios de justicia y equidad, el cumplimiento de los propósitos que impulsan la potestad sancionadora que le ha sido conferida.
A saber:

i. La calificación de la falta o faltas cometidas;
ii. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta;
iii. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia); y,
iv. Finalmente, que la imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Las indicadas circunstancias, atinentes al hecho, al infractor y a la magnitud de la falta, en opinión de esta Sala, en su conjunto, objetivamente colocan al órgano en posibilidad de concretizar la potestad punitiva que le ha sido dada, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, garantizando así que la consecuencia jurídica que fundada y motivadamente determine, corresponda a las circunstancias específicas que priven en cada caso, y además, en un plano de superior importancia, que en su ejercicio se cumplan los objetivos que persigue la facultad punitiva, los fines retributivo y de ejemplaridad de la sanción, con los cuales se busca resarcir al Estado la lesión o daño resentidos con la infracción y, a la par, disuadir al resto de los sujetos en quienes impacta la norma, sobre la intención de obviarla.

Y aquí cierro la lectura textual; y de lo cual, no se desprenden los elementos a que se ciñe el proyecto para determinar la no reiteración.

Como se advierte, de ninguna forma es posible desprender ambos elementos señalados de lo esgrimido por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, circunstancia que aleja el razonamiento y modifica sin sustento, el contenido del mismo de manera delusoria y subjetiva, lo que en nada abona

al estudio jurídico, congruente y coherente de la calificación de la infracción que nos ocupa.

En adición y en cuanto al caso concreto, en la resolución se establece que la obligación atribuida al partido político denunciado — *relativa al cumplimiento de las reglas de paridad y de acciones afirmativas en el registro de candidaturas* — se configuró como un deber jurídico único, cuyo momento de exigibilidad se actualizó exclusivamente durante el periodo legalmente previsto para la presentación de solicitudes de registro y que no resulta jurídicamente válido fraccionar dicha conducta por municipio, planilla o fórmula, pues ello implicaría desagregar artificialmente un mismo incumplimiento normativo para construir una pluralidad de infracciones inexistente.

Sin embargo, desde mi perspectiva, por una parte y contrario a lo que acabo de señalar; desde luego que existe una repetición sucesiva de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas a los partidos políticos y coaliciones través de los lineamientos de paridad y acciones afirmativas durante el periodo de registro de las candidaturas, que se reflejó, además, en etapas posteriores del proceso electoral pasado; lo que, a su vez efectivamente, actualiza esta única infracción conforme al Código Electoral.

Ello porque, en breves palabras, sí la reiteración conforme al criterio invocado consiste en la vulneración sistemática de una misma obligación; entonces, significa que estamos frente a una transgresión u omisión en el cumplimiento de una, otra y otra forma y otra vez más, repetidamente; que en conjunto constituye una misma obligación.

Y aquí el núcleo de mi separación, desde mi perspectiva, en estos casos en particular, la calificación o factor de REITERACIÓN se ve, se encuentra, se trasluce o se distingue claramente con el hecho de incumplir, repetidamente, con una obligación que tiene diversas formas de expresarse como por ejemplo:

- Postular paritariamente en sindicaturas,
- Pero también, con la relativa a la paridad en presidencias municipales,
- además de inobservar la postulación de ciudadanía integrante de grupos históricamente vulnerados en lista de diputaciones bajo el principio de representación proporcional; así como, propietarios y suplentes de grupos históricamente vulnerados en las planillas para las alcaldías;
- O bien, la postulación de las juventudes en el mismo ámbito.

Es decir, se actualiza la reiteración porque se acredita el incumplimiento del partido político de una forma, de otra y de otra más repetidamente respecto de la misma obligación a que se encontraba sujeta esta fuerza política; y que en su conjunto son consideradas como una única conducta, consistente en la inobservancia a un acuerdo emitido por el Consejo General - que a su vez o en consecuencia, actualiza la infracción a los lineamientos.

Debo, además acentuar que, desde mi opinión, es importante acreditar el elemento de la reiteración porque es en esta parte de la resolución donde se impacta con suma claridad, pormenorizada y objetivamente, el grado y la forma del incumplimiento a la obligación de postular con paridad y en función a acciones afirmativas por parte de las fuerzas políticas contendientes en el proceso electoral pasado

Este grado y forma deben responder en congruencia y coherencia, con el resto del estudio de la calificación; e incluso, en esto debería apoyarse con mayor sentido el estudio de la individualización; en efecto, al considerar la actualización de la reiteración la resolución de cuenta, cobra mayor sentido la imposición de la sanción impuesta; sin que ésta resulte demasiado baja o discordante con el resto del análisis y el grado de afectación a los principios; pero sí acorde, proporcional, suficiente y eficiente, por ser la primera vez que se emprende un estudio de esta naturaleza y que, por tanto, debería suponer un precedente importante con el fin de disuadir el indebido incumplimiento en el futuro proceso electoral.

También debo mencionar que, el criterio en esta materia de derecho administrativo sancionar no es un tema suficientemente explorado y dada la multiplicidad de contextos o circunstancias que redundan sobre el tema de conductas, calificaciones, individualizaciones y sanciones; lo que sostengo en los términos aquí apuntados; no obstante, en absoluto altera mi coincidencia con el resto del contenido de la resolución, o mejor dicho, con el sentido de la misma.

Guadalajara, Jalisco, a 27 de febrero de 2026

SILVIA GUADALUPE BUSTOS VÁSQUEZ
CONSEJERA ELECTORAL

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ZOAD JEANINE GARCÍA GONZÁLEZ, CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INSTAURADO DE OFICIO EN EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RADICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSO-QUEJA-002/2025

Con fundamento en el artículo 50, párrafos 1 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, formulo el presente **VOTO PARTICULAR**, con relación a la Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario instaurado de oficio en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, radicado con el número de expediente **PSO-QUEJA-002/2025**, misma que fue aprobada por mayoría de votos en la cuarta sesión extraordinaria celebrada el 25 de febrero de 2026.

De manera respetuosa me aparto del sentido aprobado por la mayoría, pues estimo que el estudio de fondo contenido en el Considerando Cuarto —particularmente en lo relativo a la CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN y a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN— no desarrolla un análisis exhaustivo ni metodológicamente adecuado respecto de las conductas acreditadas. Igualmente, no comparto el contenido de los

puntos de acuerdo donde se declara la existencia de la infracción en singular y se impone como sanción una AMONESTACIÓN PÚBLICA.

Lo anterior en virtud de que, desde mi apreciación, desdibuja la función sancionadora administrativa de este órgano electoral, que debe traducirse en una medida proporcional y ejemplar, con eficacia disuasiva real frente a la posible comisión de infracciones similares en el futuro. En mi opinión, atendiendo a las circunstancias objetivas del caso concreto, la sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA resulta poco trascendente frente al incumplimiento acreditado y, por ende, deviene desproporcionada en relación con la gravedad de las conductas analizadas y que, insisto, debe satisfacer el sistema sancionador electoral.

En primer lugar, la resolución parte de una premisa incorrecta, al encuadrar la conducta exclusivamente como infracción al cumplimiento de acuerdos o lineamientos de este Instituto, actualizando así la fracción II del párrafo 1 del artículo 447 del Código Electoral del Estado de Jalisco. Es decir, subsume en una sola infracción lo que, en realidad, constituye una pluralidad de conductas autónomas, cada una con elementos normativos propios y con afectaciones diferenciadas a bienes jurídicos tutelados por el sistema electoral.

Reducir el reproche a “incumplir lineamientos” diluye la jerarquía normativa del deber infringido y empobrece la fundamentación.

Aunado a que, esta unificación analítica disuelve la entidad propia de cada incumplimiento, impide valorar de manera diferenciada su naturaleza, gravedad, grado de afectación y nivel de cumplimiento, y conduce, en consecuencia, a una individualización de la sanción que no refleja adecuadamente la magnitud del incumplimiento acreditado.

Con este contexto, me referiré puntualmente al apartado relativo a la **CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN**, en los siguientes términos:

1. **Infracción imputada, hechos que la actualizan y normativa aplicable**

   En la Resolución aprobada por la mayoría se establece que se actualizó la infracción prevista por el artículo 447, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral del Estado de Jalisco. Sin embargo, los hechos que se describen no constituyen meros incumplimientos instrumentales, sino, lo que se acredita es la vulneración directa al principio constitucional de igualdad sustantiva, así como normativa del propio Código Electoral.

En efecto, el artículo 41, párrafo tercero, fracción I, de la Constitución, establece que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

En términos análogos, tratándose del principio de igualdad sustantiva en la postulación de candidaturas de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, no estamos ante reglas accesorias o meramente programáticas, sino frente a un mandato constitucional directamente vinculante.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras razones, por origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, género, preferencias sexuales o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La igualdad sustantiva, en este contexto, no se agota en un mandato de trato formal, sino que exige la adopción de medidas diferenciadas y compensatorias que permitan revertir condiciones estructurales de exclusión. De ahí que las acciones afirmativas en materia electoral constituyan mecanismos constitucionalmente válidos y necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones reales de igualdad.

En ese sentido, cuando un partido político incumple con las reglas (legales o producto de acciones afirmativas) de postulación dirigidas a asegurar la inclusión de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos de la representación política, ya sea en número o ubicación de competitividad, no incurre únicamente en un incumplimiento reglamentario, sino que vulnera directamente el principio de igualdad sustantiva y el derecho de acceso a la función pública en condiciones reales de equidad.

Al igual que ocurre con la paridad, estas medidas constituyen límites materiales a la libertad de autoorganización de los partidos políticos. Su naturaleza no es optativa ni meramente orientadora, sino obligatoria.

Por tanto, la tipificación no puede agotarse en la fracción II del párrafo 1 del artículo el 447 del Código Electoral del Estado de Jalisco, como se sostiene en la resolución, sino que, se actualizan, al menos, la fracción I —relativa a la infracción de normas contenidas en la legislación electoral— y la fracción XVI —que sanciona la violación a cualquier disposición del propio Código—, **porque lo que se ha vulnerado no es únicamente un acuerdo administrativo, sino normas sustantivas del régimen electoral.**

Reducir dicha vulneración a una infracción genérica prevista en la fracción II del artículo 447 en cita, sin reconocer expresamente que lo lesionado es un principio constitucional estructural, implica desdibujar la entidad del bien jurídico tutelado y, en consecuencia, incidir indebidamente en la calificación de la gravedad de la falta.

En este sentido, es mi opinión, que la infracción no debía analizarse únicamente desde la óptica del incumplimiento de una disposición legal secundaria, sino desde la dimensión constitucional del principio de igualdad sustantiva, lo que exigía que esta autoridad electoral valorara la conducta a partir del grado de afectación al principio democrático de representación equilibrada.

Por tanto, al acreditarse un **incumplimiento a las reglas de postulación de igualdad sustantiva relativa a un grupo en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, lo que se actualiza es una vulneración directa a las disposiciones contenidas en la legislación que da estructura el sistema electoral,** circunstancia que debió incidir tanto en la calificación de la infracción como en la determinación de la sanción correspondiente.

2. **Insuficiente motivación**

Por otra parte, el apartado de MARCO JURÍDICO contiene amplias referencias doctrinales y convencionales —lo cual es valioso—, pero no se citan con precisión las disposiciones concretas del Código Electoral ni el contenido específico de las reglas aplicables.

En un procedimiento sancionador, el núcleo debe ser:

- La norma concreta infringida.
- Su contenido específico.
- La conducta típica.
- El encuadre claro.

Por lo tanto, si no se explicita qué artículo del Código Electoral del Estado de Jalisco fue vulnerado y cómo se actualiza el supuesto normativo, la motivación queda incompleta.

3. **Bien jurídico tutelado**

La resolución aprobada por la mayoría se limita en sostener que la infracción transgredió el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada, impactando en la participación democrática y en la inclusión de grupos de atención prioritaria.

Si bien, lo anterior es cierto, estimo que dicho análisis resulta insuficiente, pues no identifica con precisión el bien jurídico tutelado por las normas efectivamente transgredidas, ni desarrolla la trascendencia constitucional de los principios involucrados.

En materia sancionadora, el estudio del bien jurídico tutelado no puede reducirse a una referencia genérica al derecho de la ciudadanía a ser votada, sino que debe atender al valor constitucional específico que la norma protege. En el caso que nos ocupa, desde mi opinión, lo que se encuentra en juego **no es únicamente el derecho individual de acceso a cargos públicos, sino la**

vigencia efectiva uno de los principios estructurales del sistema democrático: la igualdad sustantiva.

Ello constituye un mandato constitucional de optimización que imponen deberes positivos a los partidos políticos como entidades de interés público. En ese sentido, al no desarrollar esta dimensión constitucional del bien jurídico tutelado, la resolución diluye la afectación acreditada y la subsume en una fórmula amplia que impide dimensionar adecuadamente la gravedad de la conducta.

Ante ello, mi postura es que el incumplimiento a las reglas de inclusión no sólo impacta en el derecho de la ciudadanía a ser votada, sino que erosiona el modelo constitucional de democracia representativa e incluyente.

4. **Singularidad o pluralidad de las faltas**

La resolución sostiene que la conducta reviste carácter **SINGULAR**, al tratarse, según se afirma, de la infracción a los Lineamientos a través de la omisión de implementar las acciones afirmativas en favor de personas en situación de vulnerabilidad.

Respetuosamente estimo que dicha conclusión es incorrecta desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador.

La singularidad de la falta no depende de que todas las conductas sean atribuibles al mismo sujeto obligado, sino que exista unidad en el tipo normativo, en la obligación incumplida y en el bien jurídico afectado. En el caso, se acreditan incumplimientos que derivan de obligaciones distintas, previstas en normas diversas y orientadas a tutelar principios constitucionales diferenciados.

Asimismo, en el caso concreto, la resolución identifica al menos dos tipos de omisiones claramente diferenciadas:

- La omisión de postular 5 de 10 fórmulas de personas con discapacidad en ayuntamientos.
- El incumplimiento relativo a la distribución no concentrada de candidaturas provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad en listas de representación proporcional para diputaciones.

Cada una de estas conductas se sustenta en obligaciones normativas distintas y tutela bienes jurídicos específicos, como lo son la igualdad sustantiva y la representación política efectiva. La circunstancia de que todas se materialicen en el mismo proceso electoral o se imputen al mismo partido político no las convierte automáticamente en una sola infracción.

Por ello, estimo que la resolución incumple con el principio de exhaustividad, al no realizar un análisis diferenciado de la gravedad de cada incumplimiento y optar, en cambio, por una calificación global que diluye la entidad propia de cada conducta y conduce a una sanción unificada que no refleja adecuadamente la suma de las afectaciones producidas.

Por tanto, en mi concepto, el caso debió analizarse como una pluralidad de infracciones, lo que necesariamente debió incidir en la calificación de la gravedad y en la individualización de la sanción, evitando que la acumulación de incumplimientos se traduzca, paradójicamente, en una atenuación de la respuesta sancionadora.

5. **Reiteración**

Si bien el proyecto distingue correctamente entre reincidencia y reiteración conforme al criterio sostenido por la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-85/2006, discrepo de la interpretación restrictiva que adopta al exigir, como condición indispensable, una separación temporal sucesiva entre las conductas.

La reiteración no presupone una infracción previamente sancionada ni necesariamente la existencia de actos cometidos en distintos momentos procesales. Lo que la caracteriza es la vulneración sistemática de una misma obligación jurídica.

En el caso en concreto, como ya lo he mencionado, se tuvo por acreditadas tos tipos de infracciones:

- La omisión de postular 5 de 10 fórmulas de personas con discapacidad en ayuntamientos.
- El incumplimiento relativo a la distribución no concentrada de candidaturas provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad en listas de representación proporcional para diputaciones.

En consecuencia, el partido dejó de postular un total de 5 fórmulas conforme a las obligaciones de inclusión aplicables, afectando con ello la participación política de personas con discapacidad.

Además, hizo una concentración indebida relativa a las candidaturas de grupos pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, personas indígenas, personas con discapacidad y jalisciense residente en el extranjero.

Esta magnitud cuantitativa, evidencia una inobservancia reiterada de las obligaciones de inclusión en distintos ámbitos de postulación.

Esta dimensión cuantitativa no puede analizarse como una sola infracción fragmentada en cifras. Cada fórmula omitida constituye una actualización autónoma del deber jurídico de postulación conforme al principio de inclusión. La obligación no era abstracta ni genérica: debía cumplirse respecto de cada planilla y cada acción afirmativa exigible.

Por ello, la omisión reiterada en distintos municipios, en diversas planillas y diputaciones respecto de múltiples grupos en situación de vulnerabilidad no puede ser considerada un incumplimiento unitario o accidental. La repetición del mismo defecto normativo en varios supuestos concretos revela una inobservancia sistemática del deber constitucional de garantizar el acceso en condiciones de igualdad.

En el caso, aun cuando el deber de cumplir con las disposiciones de inclusión y las acciones afirmativas se actualiza formalmente durante el periodo de registro de candidaturas, lo cierto es que dicho deber se proyecta respecto de cada planilla, fórmula o lista registrada. Cada incumplimiento concreto constituye una manifestación autónoma de la misma obligación desatendida.

Así, no se trata de fraccionar artificialmente una conducta única, sino de reconocer que la omisión se exteriorizó en múltiples supuestos normativamente exigibles, lo que revela un patrón de incumplimiento dentro del mismo proceso electoral.

A lo anterior, toma relevancia el criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-96/2010, donde se pronunció expresamente sobre un tema

análogo. En ese asunto, el órgano jurisdiccional analizó nueve entrevistas radiofónicas difundidas dentro del mismo proceso electoral y sin separación temporal relevante entre ellas, y concluyó que la autoridad responsable había realizado una indebida individualización de la sanción, al no valorar el carácter sistemático y reiterado de las conductas. En palabras del propio Tribunal se desprende:

> "...la sanción impuesta no corresponde con la gravedad de la conducta y las circunstancias de su comisión y por tanto no genera un adecuado efecto disuasivo que evite la comisión de similares conductas ilegales en el futuro."

De este criterio se advierte que, cuando las conductas se actualizan de manera reiterada dentro de un mismo contexto temporal y electoral, deben tomarse en cuenta para determinar si existe un incumplimiento sistemático, pues hacerlo de otro modo desdibuja su gravedad real y neutraliza el efecto disuasivo de la sanción.

Si nueve transmisiones dentro de un mismo periodo fueron consideradas suficientes para configurar una conducta sistemática y reiterada, con mayor razón deben recibir ese tratamiento los incumplimientos a la paridad y a las

reglas de inclusión verificadas en diversos municipios durante el mismo periodo de registro, así como lo que ve a la distribución concentrada de candidaturas provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad en listas de representación proporcional para diputaciones.

En ese sentido, entender la reiteración únicamente como la repetición de una conducta en momentos temporalmente separados desdibuja su diferencia con la reincidencia y restringe indebidamente la potestad sancionadora cuando, dentro de un mismo proceso electoral, se actualizan múltiples incumplimientos de una misma obligación por el mismo actor político.

6. **Intencionalidad**

En el apartado relativo a la intencionalidad, la resolución concluye que no existió dolo ni mala fe, y que no se advierten elementos para considerar que la violación a la norma fue cometida de manera intencional.

Me aparto de dicho criterio, en primer término, porque esta conclusión no se encuentra respaldada por un desarrollo argumentativo suficiente que permita sostenerla.

En segundo lugar, porque, desde mi perspectiva, en el derecho administrativo sancionador electoral, la ausencia de dolo no puede afirmarse de manera meramente declarativa, sino que debe justificarse a partir de elementos objetivos que expliquen por qué la conducta no fue intencional. Así, la carga argumentativa no se satisface con invocar el principio de presunción de inocencia, sino demostrando, a partir de las circunstancias del caso, que el incumplimiento no fue consecuencia de una decisión consciente.

En el presente asunto, el partido político conocía con anticipación las reglas constitucionales y legales en materia de inclusión y acciones afirmativas.

No obstante ese marco normativo claro, vinculante y de conocimiento previo para el partido, en el caso concreto el instituto político determinó registrar solo 5 fórmulas de las 10 que estaba obligado a postular de personas con discapacidad en sus planillas. Este incumplimiento no representa un desliz marginal dentro de un universo amplio, sino el incumplimiento al 50% del supuesto normativo aplicable. La obligación era clara, única y plenamente exigible.

La obligación no consistía en procurar algunas de las fórmulas, sino en cumplir íntegramente con el número mínimo exigido, por ello, cuando el partido decide registrar 5 de 10 fórmulas, no estamos frente a una imposibilidad material acreditada en autos, sino ante una decisión concreta de configuración de candidaturas que deja sin satisfacer una parte del mandato de inclusión.

En el caso nos encontramos frente a un incumplimiento de carácter cuantitativo, es decir, ante la ausencia total de las candidaturas exigidas. Ello no implica una simple disminución en las oportunidades de acceso, sino la anulación misma de la posibilidad de competir. Se trata de la afectación más intensa posible, pues suprime por completo la opción de acceder al cargo y perpetúa la exclusión que las medidas de inclusión buscan precisamente erradicar.

Por otro lado, relativo a la distribución de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. La propia resolución en el apartado correspondiente dice a la letra:

"En ese tenor, la acción afirmativa prevista en el artículo 25 de los Lineamientos no se limita a una obligación numérica, sino que exige evitar prácticas que reproduzcan la desigualdad que se pretende erradicar. Así lo ha sostenido el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al señalar que, en materia de acciones afirmativas, debe privilegiarse una interpretación finalista, orientada a impedir simulaciones y a maximizar la representatividad de los grupos destinatarios.

Así, puede definirse la acción de concentrar como *"reunir en un centro o punto lo que estaba separado*[1]*",* lo que se estima ocurre en el presente caso, al encontrarse postuladas las candidaturas de forma mayoritaria en la posición 7, 8, 9 y 10.

Por ello, aun cuando una de las candidaturas se ubique en un lugar competitivo, la concentración mayoritaria de las demás en posiciones bajas dentro del mismo tramo analizado (1 a 10) revela un patrón que contraviene el propósito medular de la medida afirmativa, pues impide que las personas de estos grupos gocen de una oportunidad real y equitativa de acceder al cargo. De aceptarse esta forma de postulación, bastaría cumplir numéricamente y colocar todas las candidaturas afirmativas en los últimos lugares, lo que vaciaría de contenido la finalidad de la norma.

[1] https://dle.rae.es/concentrar

En consecuencia, este Consejo General estima que la distribución presentada por el instituto político **no satisface el cumplimiento sustantivo de la acción afirmativa, al perpetuar la desigualdad estructural que la medida busca corregir; y por tanto, se aparta del espíritu y objeto del artículo 25 de los Lineamientos.”**

En la resolución se reconoce que la postulación no se ajustó plenamente a los parámetros establecidos; sin embargo, pese a advertir el desajuste, se concluye que no existió intención de incumplir, sin desarrollar por qué esas configuraciones específicas de las listas —que son resultado de una determinación estratégica— no pueden ser consideradas producto de una decisión consciente.

Es mi criterio que, en los supuestos referidos, las candidaturas no se generan de manera automática ni accidental, sino que constituyen el resultado de actos deliberados de selección y ordenación interna por parte del partido político.

Por ello, cuando el incumplimiento se produce respecto de obligaciones numéricas claras y previamente conocidas, la conclusión sobre la ausencia de

dolo, como la que se hace en la resolución, exige una motivación reforzada que explique por qué esas decisiones no pueden ser interpretadas como voluntarias, lo cual no se cumple.

En efecto, la exigencia argumentativa no se satisface en la resolución aprobada; y por el contrario, a partir de los elementos expuestos, desde mi interpretación, las circunstancias del caso permitían, cuando menos, un análisis serio sobre la posible actualización de una conducta dolosa.

Una vez expuestos los motivos de mi disenso en lo relativo a la calificación de la infracción, procedo a formular las consideraciones correspondientes respecto de la **individualización de la sanción**, en los términos siguientes:

Como se establece en la resolución, el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este organismo electoral dispone que, para efectos de graduar la infracción e individualizar la sanción conforme a lo previsto en el artículo 459, párrafo 5, del Código Electoral, debe atenderse a su calificación, que puede ser, levísima, leve o grave (ordinaria, especial o mayor) tomando en consideración, entre otros elementos, la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o

reglamentaria; el bien jurídico tutelado; el efecto producido por su transgresión; el peligro o riesgo generado; y, en su caso, la dimensión del daño.

En consideración a lo anterior, la individualización de la sanción no constituye un acto discrecional desvinculado del tipo infractor, sino un ejercicio de subsunción jurídica que exige adecuar la conducta acreditada a la descripción normativa prevista por el órgano legislativo. En este sentido, el principio de tipicidad, como manifestación del principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, establece que la imposición de la sanción derive de la correspondencia entre los elementos del tipo legal y los hechos acreditados en el expediente.

Los tipos administrativos no son construcciones aisladas, sino que forman parte de un sistema normativo diseñado para tutelar bienes jurídicos específicos. Su existencia responde a la necesidad de proteger intereses jurídicos de relevancia colectiva, cuya afectación justifica la intervención sancionadora del Estado. De ahí que la graduación de la sanción deba guardar coherencia con la entidad del bien jurídico lesionado y con la intensidad de la afectación producida.

Asimismo, el principio de taxatividad exige que, una vez determinada la actualización del tipo infractor, la autoridad valore de manera objetiva las circunstancias concurrentes del caso, a fin de establecer una sanción congruente

con la gravedad de la conducta. Toda sanción debe guardar una relación de proporcionalidad con la infracción cometida, de modo que el reproche jurídico sea acorde con la lesividad del comportamiento respecto de los valores protegidos por la norma.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, el Código Electoral y el Reglamento de Quejas y Denuncias ya citados, confieren a esta autoridad electoral una potestad discrecional para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor y que, a su vez, resulte idóneo, necesario y proporcional para prevenir la reiteración de conductas similares por parte de los partidos políticos.

Si bien, se insiste, que la sanción administrativa debe cumplir una función ejemplar y disuasiva, orientada a evitar la comisión futura de infracciones, también es cierto que su imposición exige un análisis integral de las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como de los elementos subjetivos que rodean la conducta, a fin de garantizar que no resulte excesiva o desproporcionada, pero tampoco simbólica o inocua.

En ese sentido, tratándose de incumplimientos que afectan directamente principios constitucionales como la paridad y la inclusión de grupos históricamente excluidos,

la respuesta sancionatoria no puede limitarse a un correctivo meramente formal, pues ello deja inaplicable de contenido las obligaciones legales previamente establecidas. Cuando la infracción implica la supresión absoluta de candidaturas y, con ello, la eliminación misma de la posibilidad de competir la intensidad de la afectación exige una reacción institucional acorde con la gravedad del daño al orden constitucional electoral.

Por otra parte, en los proyectos se incorpora de manera reiterada el argumento de que la dimensión sustantiva de la afectación "no es susceptible de medición objetiva", en el sentido de que no puede determinarse quién habría resultado electa o electo de haberse cumplido plenamente la regla. A partir de esa premisa, se modula la carga sancionadora. Ese razonamiento, desde mi perspectiva, es incorrecto.

En materia de acciones afirmativas, el daño no depende del resultado final de la elección. No es necesario acreditar que una persona con discapacidad o una persona perteneciente a un grupo históricamente discriminado habría obtenido el triunfo para sostener que se vulneró el principio de igualdad sustantiva.

La afectación se actualiza desde el momento mismo en que se incumple el porcentaje obligatorio; se omite postular a un grupo en los términos exigidos; se

altera la integración equilibrada de listas o planillas; y se impide el acceso a la competencia electoral en condiciones de igualdad.

La lesión jurídica no radica en determinar quién habría ganado, sino en la infracción del mandato normativo y en la alteración de las condiciones estructurales de acceso al poder público. El bien jurídico tutelado no es el resultado electoral, sino la igualdad sustantiva en la postulación.

El hecho de que no sea posible reconstruir contrafácticamente qué habría ocurrido de haberse cumplido la regla no disminuye la gravedad del incumplimiento. El parámetro correcto de análisis es el deber objetivo impuesto por la norma y la afectación al derecho de acceso en condiciones de igualdad, no la especulación sobre escenarios hipotéticos.

Reducir la intensidad de la sanción bajo el argumento de que el daño no es “medible objetivamente” desplaza indebidamente el eje del análisis desde la obligación constitucional incumplida hacia un resultado incierto, y con ello trivializa la función protectora y transformadora de las reglas de inclusión.

La igualdad sustantiva no se mide en votos obtenidos, sino en oportunidades garantizadas.

En adición, estimo pertinente traer como referente el criterio sostenido por Instituto Nacional Electoral (INE) en la resolución **UT/SCG/Q/CG/124/2024**[2] donde se analiza el incumplimiento de un partido político nacional respecto de la obligación de adecuar oportunamente sus documentos básicos a las reformas legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y otros estándares normativos vigentes.

En dicha resolución se acreditó que el partido no realizó, dentro del plazo otorgado, las modificaciones necesarias a sus documentos internos, pese a existir una obligación expresa derivada de reformas legales y lineamientos emitidos por el Consejo General.

La conducta fue calificada como de **gravedad especial**, al considerar, entre otros elementos, la jerarquía constitucional y legal de las normas incumplidas vinculadas con derechos humanos y el principio de paridad, así como el impacto institucional de la omisión. Aun cuando no se acreditó dolo ni beneficio económico, la infracción fue considerada relevante por tratarse de un deber claro, previo y exigible.

[2] https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/182985/CG2ex202505-08-rp-2-73.pdf

A la luz de esa argumentación, se determinó imponer una multa económica al partido, razonando que la sanción debía ser ejemplar y disuasiva, y que una amonestación pública resultaría insuficiente frente a la gravedad especial de la conducta, por lo que el correctivo debía ser proporcional, pero eficaz para prevenir reincidencias.

Este precedente resulta particularmente ilustrativo para el caso que nos ocupa, pues si el incumplimiento consistente en la falta de adecuación normativa interna —de naturaleza formal y estructural— fue considerado de gravedad especial y merecedor de una sanción económica, con mayor razón los incumplimientos que inciden directamente en la integración de candidaturas y, por ende, en el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres y de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, deben analizarse con, al menos, el mismo rigor sancionador.

En efecto, **si los Documentos Básicos constituyen el andamiaje normativo que orienta y disciplina la actuación de los partidos políticos, y su sola desactualización fue considerada una afectación de gravedad especial** por comprometer reglas vinculadas con derechos humanos y paridad, **entonces la inaplicación directa de esos principios en el momento mismo de la postulación de candidaturas —esto es, en el espacio donde las reglas dejan de ser abstractas y se materializan en el acceso**

real al poder público— representa una lesión aún más intensa al bien jurídico tutelado.

No se trata ya de una omisión en la adecuación de reglas internas, **sino del desconocimiento práctico de mandatos constitucionales en el acto concreto de distribución del poder político.** Por ello, si la falta de armonización normativa ameritó una sanción económica por su gravedad especial, **la omisión consistente en excluir o reducir indebidamente candidaturas de mujeres o de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados no puede razonablemente recibir un tratamiento sancionador menor**, pues la afectación trasciende el plano institucional y se traduce en la negación efectiva de oportunidades de acceso al cargo.

Sostener lo contrario implicaría admitir que es más grave no ajustar el marco normativo que incumplirlo en la práctica, conclusión que, desde mi perspectiva, resulta por completo incompatible con el principio de inclusión sustantiva que este Instituto Electoral debe garantizar y sancionar en su incumplimiento.

Por otra parte, en la sesión extraordinaria en la que se aprobó la Resolución que nos ocupa, también fueron resueltos los procedimientos ordinarios sancionadores iniciados de oficio en contra de otros **cinco partidos políticos y dos coaliciones** por

diversas conductas que también violentaron el principio de paridad y las reglas de inclusión vigentes en el Proceso Electoral Local 2023-2024 con diferentes niveles de incumplimiento en cada una de ellas, en todas esas resoluciones se invoca el principio de proporcionalidad y la lógica costo-beneficio como función disuasoria del régimen sancionador. Sin embargo, se arriba a la misma conclusión:

- Se acredita la singularidad de la infracción;
- Se tiene como Culposa;
- Se declara la inexistencia de la reiteración;
- Se califica la infracción como Levísima.
- Y se sanciona con una amonestación pública.

En esos términos y, considerando que para cada una de las infracciones cometidas por las fuerzas políticas existe un nivel de cumplimiento diferenciado que oscila entre el 12.5% y el 87.5% de incumplimiento, no es jurídicamente defendible que tengan el mismo costo. Por lo tanto, no es proporcional ni disuasorio que tenga la misma consecuencia una omisión marginal que la exclusión casi total de un grupo en situación de vulnerabilidad.

Cuando se impone exactamente la misma sanción frente a niveles tan distintos de afectación, el mensaje institucional que se envía es muy claro: **Incumplir sale barato.**

Y si incumplir sale barato, la función preventiva del régimen sancionador se desactiva.

Por lo expuesto, estimo que la sanción aprobada consistente en una **Amonestación Pública** no satisface el estándar de proporcionalidad en su vertiente de idoneidad y efecto disuasivo, pues no guarda correspondencia con la entidad de la infracción acreditada ni resulta suficiente para prevenir su reiteración en procesos electorales subsecuentes, y que la adopción de esta respuesta sancionadora mínima frente a las infracciones de esta naturaleza genera el riesgo de normalizar el incumplimiento como una conducta estratégicamente asumible.

En conclusión, dado que considero que la metodología es errónea, la fundamentación está incompleta, la tipificación es restrictiva, la calificación subjetiva es insuficiente, la individualización es desproporcionada y el mensaje institucional es equivocado; no comparto los apartados relativos a la **CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN** ni la **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**, ni los **PUNTOS DE ACUERDO** donde se **declara la existencia de la infracción en SINGULAR y se impone una AMONESTACIÓN PÚBLICA**.

Porque si queremos que las reglas de inclusión sean reales, exigibles y efectivas, el régimen sancionador debe ser coherente, proporcional y disuasorio. De lo contrario, el mensaje que enviamos es que **incumplir sale barato.**

Guadalajara, Jalisco; a 27 de febrero de 2026.

Zoad Jeanine García González[3]

Consejera Electoral

[3] Este documento ha sido firmado electrónicamente, en términos de lo previsto en los artículos 9, 10 y 12 de los Lineamientos para el Uso y la Operación de la Firma Electrónica Avanzada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO	DD-IEPC-0006
SECUENCIA DE DOCUMENTO	60467615
SELLO DIGITAL	69a270660fec6b2557643793
ESTAMPILLADO	2026-02-27T22:13:53.000-0600

FIRMANTE	ZOAD JEANINE GARC?A GONZ?LEZ / ZOAD.GARCIA@IEPCJALISCO.MX
FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR	NjA0Njc2MTV8UG9saXRpY2EgRXN0YW1wYSBUaWVtcG89MS4zLjYuMS40LjEuOTIwMy4yLjEsIERpZ2VzdGlvbiBFc3RhbXBhIFRpZW1wbz1BNkI5ODA3NEU1Q0MyQ0VEQzREQUU2RkNGRENCRDcwMkRBNjY4MjEwRkMxRDVFNTE3NkQ1RTRDRjRCMEIyQTBFLCBOdW1lcm8gU2VjdWVuY2lhIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTQzNTA0MzYxLCBGZWNoYSBFbWlzaW9uIEVzdGFtcGEgVGllbXBvPTIwMjYwMjI4MDQxMzUzWg==
SITIO DE VALIDACIÓN	https://portalvalidacion.jalisco.gob.mx/#/resultado/2EAEAA73F8C61B26CD8AE9B0566017B9

El presente documento ha sido firmado electrónicamente, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, con el mismo valor jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; en términos de lo previsto en los artículos 8, 9, 10 y 12 de los Lineamientos para el Uso y la Operación de la Firma Electrónica Avanzada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063-2023.